

CONGRESO NACIONAL
CAMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2008
ANEXO II AL ORDEN DEL DIA N° 1168
Impreso el día 14 de noviembre de 2008

SUMARIO

COMISION DE PRESUPUESTO Y HACIENDA Y DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

Dictamen de minoría en el proyecto de ley venido en revisión por el que se dispone la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino. (CD-70/08)

DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo el número CD-70/08, disponiendo la unificación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones en un único régimen previsional que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); y, por las razones que expone el miembro informante, os aconseja el rechazo del mismo y la aprobación del siguiente:

Proyecto de ley

Artículo 1º.- Declárase la necesidad de la reforma integral del Sistema Previsional Argentino y encomiéndose, en el ámbito del Honorable Congreso de Nación, a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social del Honorable Senado de la Nación, el análisis, evaluación y propuesta de reforma integral del sistema previsional argentino, el que deberá contemplar:

a) Los principios de universalidad y solidaridad, garantizando una prestación básica colectiva y un ingreso ciudadano para los hombres mayores de 65 años y las mujeres que superen los 60 años;

b) La protección de los recursos de la seguridad social;

c) Transparencia y control de la administración de los fondos del sistema;

d) Un haber previsional del 82% móvil;

e) Su sustentabilidad, asistida, de ser necesario, con aportes del Estado sin afectar fondos coparticipables de las provincias, desafectando el 15 % de la masa coparticipable neta destinada al sistema de seguridad social;

f) La redacción de un Código de la Seguridad Social;

g) La creación de una persona de derecho público no estatal con autonomía funcional y financiera, a los fines de la administración del sistema previsional argentino y del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por Decreto N° 897/07 o el que en el futuro lo reemplace;

h) La recuperación de la movilidad real de los haberes jubilatorios a través de la derogación de la Ley de Solidaridad Previsional, 24.463, y las Leyes Nros. 24.241, 26.417, y sus modificatorias.

A esos efectos, inclúyase como propuesta de discusión el Documento de Reforma Integral del Sistema Previsional Argentino, incluido como Anexo I de la presente con su Apéndice, y la modificación de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, incluida como Anexo II.

Artículo 2º.- Declárase la indisponibilidad de los fondos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la República Argentina y de los fondos de las AFJP, en consecuencia protéjanse los fondos económicos y financieros pertenecientes a dichos sistemas, preservando los mismos al objeto específico previsional de pago de beneficios existentes o a otorgarse en el plazo de los 180 días.

Desde la sanción de la presente ley y hasta la reformulación integral del régimen previsional argentino en el plazo establecido en el presente artículo, se declara la transición previsional con el propósito de proteger sus recursos y destinarlos sólo a los fines previsionales.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto creado por Decreto N° 897/07 y compuesto por el excedente del sistema una vez que se satisfaga la recomposición de los haberes jubilatorios, podrá aplicarse solamente a la constitución de depósitos a término, en moneda local en sistema financiero argentino y a la adquisición de letras y notas del BCRA denominados en pesos.

La composición del stock de activos de las AFJP no será modificada hasta tanto se apruebe el nuevo régimen previsional.

Artículo 3º.- Durante la vigencia de la presente la ANSES y la

Superintendencia de AFJP deberán informar a las comisiones indicadas en el artículo 1º de la presente, cada quince días corridos a partir de la entrada en vigencia la presente, el destino específico de los recursos de la seguridad social y composición de sus activos. Asimismo, esta información deberá ser publicada en la página web de la ANSES y deberá tener una actualización semanal.

Artículo 4º.- Establézcase en un plazo de ciento ochenta días el término para la presentación de la propuesta por parte de las comisiones establecidas en el artículo 1º.

Artículo 5º.- Las comisiones establecidas en el artículo 1º deberán convocar a audiencias públicas, invitando a participar a los representantes de los diferentes actores sociales vinculados a la seguridad social.

Artículo 6º.- La administración de los fondos previsionales no integran el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional y no podrán ser objeto de las facultades conferidas por el artículo 37 de la Ley N° 24.156 al señor jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

SALA DE LA COMISIÓN, 12 de noviembre de 2008.-

Ernesto R. Sanz.- Gerardo R. Morales.- Roy A. Nikisch.-

ANEXO I

DOCUMENTO DE REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO

LIBRO I

Sistema Integrado Previsional Argentino

Título I

Disposiciones Generales

Capítulo I

Creación. Ámbito de Aplicación

Artículo 1º.- Institúyase con alcance nacional el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), con sujeción a las normas de esta ley, basado en un régimen previsional público, fundamentado en el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado que se financiarán a través de un sistema de reparto asistido, que cubrirá las contingencias de vejez, invalidez y muerte y se integrará al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Artículo 2º.- Están obligatoriamente comprendidas en el SIPA y sujetas a las disposiciones que sobre afiliación establece esta ley y las normas reglamentarias que se dicten, las personas físicas mayores de dieciocho (18) años de edad que a continuación se detallan:

a) Personas que desempeñen alguna de las actividades en relación de dependencia que se enumeran en los apartados siguientes, aunque el contrato de trabajo o la relación de empleo público fueren a plazo fijo:

1. Los funcionarios, empleados y agentes que en forma permanente o transitoria desempeñen cargos, aunque sean de carácter electivo, en cualquiera de los poderes del Estado nacional, sus reparticiones u organismos centralizados, descentralizados o autárquicos, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales y obras sociales del sector público, con exclusión del personal militar de las fuerzas armadas y del personal militarizado o con estado policial de las fuerzas de seguridad y policiales.
2. El personal civil de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad y policiales.
3. Los funcionarios, empleados y agentes que en forma permanente o transitoria desempeñen cargos en organismos oficiales interprovinciales, o integrados por la Nación y una o más provincias, cuyas remuneraciones se atiendan con fondos de dichos organismos.
4. Los funcionarios, empleados y agentes civiles dependientes de los gobiernos y municipalidades provinciales, a condición que previamente las autoridades respectivas adhieran al SIPA, mediante convenio con el Poder Ejecutivo Nacional.
5. Las personas que en cualquier lugar del territorio del país presten en forma permanente, transitoria o eventual, servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada.
6. Las personas que en virtud de un contrato de trabajo celebrado o relación laboral iniciada en la República, o de un traslado o comisión dispuestos por el empleador, presten en el extranjero servicios de la naturaleza prevista en el apartado anterior, siempre que dichas personas tuvieran domicilio real en

el país al tiempo de celebrarse el contrato, iniciarse la relación laboral o disponerse el traslado o comisión.

7. En general, todas las personas que hasta la vigencia de la presente ley estuvieran comprendidas en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones por actividades no incluidas con carácter obligatorio en el régimen para trabajadores autónomos.

Cuando se trate de socios en relación de dependencia con sociedades, se estará a lo dispuesto en el inciso d).

b) Personas que por sí solas o conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan habitualmente en la República alguna de las actividades que a continuación se enumeran, siempre que éstas no configuren una relación de dependencia:

1. Dirección, administración o conducción de cualquier empresa, organización, establecimiento o explotación con fines de lucro, o sociedad comercial o civil, aunque por esas actividades no obtengan retribución, utilidad o ingreso alguno.

2. Profesión desempeñada por graduado en universidad nacional o en universidad provincial o privada autorizada para funcionar por el Poder Ejecutivo, o por quien tenga especial habilitación legal para el ejercicio de profesión universitaria reglamentada.

3. Producción o cobranza de seguros, reaseguros, capitalización, ahorro, ahorro y préstamo, o similares.

4. Cualquier otra actividad lucrativa no comprendida en los apartados precedentes.

c) Personas al servicio de las representaciones y agentes diplomáticos o consulares acreditados en el país, como también el dependiente de organismos internacionales que preste servicios en la República, si de conformidad con las convenciones y tratados vigentes resultan aplicables a dicho personal las leyes de jubilación y pensiones argentinas. Al personal que quede excluido le será de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 4º.

d) Cuando se trate de socios o sociedades, a los fines de su inclusión obligatoria en los incisos a) o b), o en ambos, serán de aplicación las siguientes normas:

1. No se incluirán obligatoriamente en el inciso a):

1.1. Los socios de sociedades de cualquier tipo cuya participación en el capital sea igual o superior al porcentual que resulte de dividir el número cien (100) por el número total de socios.

1.2. El socio comanditado único de las sociedades en comandita simple o por acciones. Si hubiera más de un socio comanditado se aplicará lo dispuesto en el punto

anterior, tomando en consideración solamente el capital comanditado.

1.3. Los socios de las sociedades civiles y de las sociedades comerciales irregulares o de hecho, aunque no se cumpla el requisito a que se refiere el punto 1.1.

1.4. Los socios de sociedades de cualquier tipo —aunque no estuvieran comprendidos en los puntos anteriores—, cuando la totalidad de los integrantes de la sociedad estén ligados por un vínculo de parentesco de hasta el segundo grado de consanguinidad y/o afinidad.

2. Sin perjuicio de su inclusión en el inciso b), cuando un socio quede incluido obligatoriamente en el inciso a) la sociedad y el socio estarán sujetos a las obligaciones de aportes y contribuciones obligatorios por la proporción de la remuneración y participación en las utilidades que el socio perciba y/o se le acrediten en cuenta, en la medida que exceda el monto que le hubiera correspondido de conformidad con su participación en el capital social.

Incorporación voluntaria

Artículo 3º.- La incorporación al SIPA es voluntaria para las personas mayores de dieciocho (18) años de edad que a continuación se detallan:

a) Con las obligaciones y beneficios que corresponden a los incluidos en el inciso a) del artículo anterior:

1. Los directores de sociedades anónimas por las asignaciones que perciban en la misma sociedad por actividades especialmente remuneradas que configuren una relación de dependencia.

2. Los socios de sociedades de cualquier tipo que no resulten incluidos obligatoriamente conforme a lo dispuesto en el inciso d) del artículo anterior;

b) Con las obligaciones y beneficios que corresponden a los incluidos en el inciso b) del artículo anterior:

1. Los miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna por esas funciones, socios no gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, síndicos de cualquier sociedad y fiduciarios.

2. Los titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común.

3. Los miembros del clero y de organizaciones religiosas pertenecientes al culto católico apostólico romano, u otros inscriptos en el Registro Nacional de Cultos.

4. Las personas que ejerzan las actividades mencionadas en el artículo 2º, inciso b), apartado 2, y que por ellas se encontraren obligatoriamente afiliadas a uno o más regímenes jubilatorios provinciales para profesionales, como asimismo aquellas que ejerzan una profesión no académica autorizada con anterioridad a la promulgación de esta ley. Esta incorporación no modificará la obligatoriedad que dimana de los respectivos regímenes locales.

5. Las amas de casa que decidan incorporarse voluntariamente al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones lo harán en la categoría mínima de aportes, pudiendo optar por cualquier otra categoría superior.

Excepción

Artículo 4º.- Quedan exceptuados del SIPA los profesionales, investigadores, científicos y técnicos contratados en el extranjero para prestar servicios en el país por un plazo no mayor de dos (2) años y por una sola vez, a condición que no tengan residencia permanente en la República y estén amparados contra las contingencias de vejez, invalidez y muerte por las leyes del país de su nacionalidad o residencia permanente. La solicitud de exención deberá ser formulada ante la autoridad de aplicación por el interesado o su empleador.

La precedente exención no impedirá la afiliación a este sistema, si el contratado y el empleador manifestaren su voluntad expresa en tal sentido, o aquél efectuare su propio aporte y la contribución correspondiente al empleador.

Las disposiciones precedentes no modifican las contenidas en los convenios sobre seguridad social celebrados por la República con otros países, ni las de la Ley N° 17.514.

Actividades simultáneas

Artículo 5º.- La circunstancia de estar también comprendido en otro régimen jubilatorio nacional, provincial o municipal, así como el hecho de gozar de cualquier jubilación, pensión o retiro, no eximen de la obligatoriedad de efectuar aportes y contribuciones a este sistema, salvo en los casos expresamente determinados en la presente ley.

Las personas que ejerzan en forma simultánea más de una actividad de las comprendidas en los incisos a), b), o c) del artículo 2º, así como los empleadores en su caso, contribuirán obligatoriamente por cada una de ellas.

Capítulo II Remuneración, Aportes y Contribuciones

Concepto de remuneración

Artículo 6º.- Se considera remuneración, a los fines del , todo ingreso que percibiére el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de

su actividad personal, en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, participación en las ganancias, habilitación, propinas, gratificaciones y suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales y regulares, viáticos y gastos de representación, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, y toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia.

La autoridad de aplicación determinará las condiciones en que los viáticos y gastos de representación no se considerarán sujetos a aportes ni contribuciones, no obstante la inexistencia total o parcial de comprobantes que acrediten el gasto.

Las propinas y retribuciones en especie de valor incierto serán estimadas por el empleador. Si el afiliado estuviera disconforme, podrá reclamar ante la autoridad de aplicación, la que resolverá teniendo en cuenta la naturaleza y modalidad de la actividad y de la retribución. Aun mediando conformidad del afiliado, la autoridad de aplicación podrá rever la estimación que no considerara ajustada a estas pautas.

Se consideran asimismo remuneración las sumas a distribuir a los agentes de la administración pública o que éstos perciban en carácter de:

1. Premio estímulo, gratificaciones u otros conceptos de análogas características. En este caso también las contribuciones estarán a cargo de los agentes, a cuyo efecto antes de proceder a la distribución de dichas sumas se deberá retener el importe correspondiente a la contribución.
2. Cajas de empleados o similares, cuando ello estuviere autorizado. En este caso el organismo o entidad que tenga a su cargo la recaudación y distribución de estas sumas, deberá practicar los descuentos correspondientes a los aportes personales y depositarlos dentro del plazo pertinente.

Conceptos excluidos

Artículo 7º.- No se consideran remuneración las asignaciones familiares, las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo, por vacaciones no gozadas y por incapacidad permanente provocada por accidente del trabajo o enfermedad profesional, las prestaciones económicas por desempleo, ni las asignaciones pagadas en concepto de becas. Tampoco se considera remuneración las sumas que se abonen en concepto de gratificaciones vinculadas con el cese de la relación laboral en el importe que exceda del promedio anual de las percibidas anteriormente en forma habitual y regular.

Renta imponible

Artículo 8º.- Los trabajadores autónomos efectuarán los aportes previsionales obligatorios establecidos en el artículo 10, sobre los niveles de rentas de referencia calculadas en base a categorías que

fijarán las normas reglamentarias de acuerdo con las siguientes pautas:

- a) Capacidad contributiva.
- b) La calidad de sujeto o no en el impuesto al valor agregado y en su caso, su condición de responsable inscripto, de responsable no inscripto o no responsable por dicho impuesto.

Base imponible

Artículo 9º.- A los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) las remuneraciones no podrán ser inferiores al importe que oportunamente se establezca.

Si un trabajador percibe simultáneamente más de una remuneración o renta como trabajador en relación de dependencia o autónomo, cada remuneración o renta será computada separadamente a los efectos del límite inferior que se establezca oportunamente. En función de las características particulares de determinadas actividades en relación de dependencia, la reglamentación podrá establecer excepciones a lo dispuesto en el presente párrafo.

Aportes y contribuciones obligatorias

Artículo 10.- Los aportes y contribuciones obligatorios al SIPA se calcularán tomando como base las remuneraciones y rentas de referencias, y serán los siguientes.

- a) Aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en este sistema;
- b) Contribución a cargo de los empleadores;
- c) Aporte personal de los trabajadores autónomos comprendidos en el presente sistema.

Porcentaje de aportes y contribuciones

Artículo 11.- El aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia será del once por ciento (11 %), y la contribución a cargo de los empleadores del dieciséis por ciento (16 %).

El aporte personal de los trabajadores autónomos será del veintisiete por ciento (27 %).

Los aportes y contribuciones obligatorios serán ingresados a través del SUSS. A tal efecto, los mismos deberán ser declarados e ingresados por el trabajador autónomo o por el empleador en su doble carácter de agente de retención de las obligaciones a cargo de los trabajadores y de contribuyente al , según corresponda, en los plazos y con las modalidades que establezca la autoridad de aplicación.

Capítulo III

Obligación de los Empleadores, de los Afiliados y de los Beneficiarios

Obligaciones de los empleadores

Artículo 12.- Son obligaciones de los empleadores, sin perjuicio de las demás establecidas en la presente ley:

- a) Inscribirse como tales ante la autoridad de aplicación y comunicar a la misma toda modificación en su situación como empleadores, en los plazos y con las modalidades que dicha autoridad establezca.
- b) Dar cuenta a la autoridad de aplicación de las bajas que se produzcan en el personal.
- c) Practicar en las remuneraciones los descuentos correspondientes al aporte personal, y depositarlos en la orden del SUSS.
- d) Depositar en la misma forma indicada en el inciso anterior las contribuciones a su cargo.
- e) Remitir a la autoridad de aplicación las planillas de sueldos y aportes correspondientes al personal.
- f) Suministrar todo informe y exhibir los comprobantes justificativos que la autoridad de aplicación les requiera en ejercicio de sus atribuciones y permitir las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que aquella ordene en los lugares de trabajo, libros, anotaciones, papeles y documentos.
- g) Otorgar a los afiliados y beneficiarios y sus derechohabientes, cuando éstos lo soliciten, y en todo caso a la extinción de la relación laboral, las certificaciones de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos y toda otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier prestación.
- h) Requerir de los trabajadores comprendidos en el SIPA, al comienzo de una relación laboral, en los plazos y con las modalidades que la autoridad de aplicación establezca, la presentación de una declaración jurada escrita de si son o no beneficiarios de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, con indicación, en caso afirmativo, del organismo otorgante y datos de individualización de la prestación;
- i) Denunciar a la autoridad de aplicación todo hecho o circunstancia concerniente a los trabajadores, que afecten o puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones que a éstos y a los empleadores imponen las leyes nacionales de previsión.
- j) En general, dar cumplimiento en tiempo y forma a las demás disposiciones que la presente ley establece, o que la autoridad de aplicación disponga.

Las reparticiones y organismos del Estado mencionados en el apartado 1. del inciso a) del artículo 2º, están también sujetos a las obligaciones enumeradas precedentemente.

Obligaciones de los afiliados y de los beneficiarios

Artículo 13.-

a) Son obligaciones de los afiliados en relación de dependencia, sin perjuicio de las demás establecidas en la presente Ley:

1. Suministrar los informes requeridos por la autoridad de aplicación, referentes a su situación frente a las leyes de previsión.
2. Presentar al empleador la declaración jurada a la que se refiere el inciso h) del artículo 12, y actualizar la misma cuando adquieran el carácter de beneficiarios de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, en el plazo y con las modalidades que la autoridad de aplicación establezca.
3. Denunciar a la autoridad de aplicación todo hecho o circunstancia que configure incumplimiento por parte del empleador a las obligaciones establecidas por las leyes nacionales de jubilaciones y pensiones.

La autoridad de aplicación, en un plazo no mayor de 45 días, deberá investigar los hechos denunciados, dictar resolución desestimando la denuncia o imponiendo las sanciones pertinentes y efectuar la denuncia penal, según corresponda y notificar fehacientemente al denunciante todo lo actuado y resuelto. El funcionario público que no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en este inciso incurrirá en falta grave.

b) Son obligaciones de los afiliados autónomos sin perjuicio de las demás establecidas en la presente ley:

1. Depositar el aporte a la orden del SUSS.
2. Suministrar todo informe referente a su situación frente a las leyes de previsión y exhibir los comprobantes y justificativos que la autoridad de aplicación les requiera en ejercicio de sus atribuciones, y permitir las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que aquélla ordene en los lugares de trabajo, libros, anotaciones, papeles y documentos.
3. En general, dar cumplimiento en tiempo y forma a las demás disposiciones que la presente ley establece, o que la autoridad de aplicación disponga.

c) Son obligaciones de los afiliados, sin perjuicio de las demás establecidas en la presente ley:

1. Suministrar los informes requeridos por la autoridad de aplicación, referentes a su situación frente a las leyes de previsión.
2. Comunicar a la autoridad de aplicación toda situación prevista en las disposiciones legales que afecte o pueda afectar el derecho a la percepción total o parcial de la prestación que gozan.

3. Presentar al empleador la declaración jurada respectiva en el caso que volvieren a la actividad.

Si el beneficiario fuera incapaz, el cumplimiento de las obligaciones, precedentemente establecidas incumbe a su representante legal.

Si existiera incompatibilidad total o limitada ente el goce de la prestación y el desempeño de la actividad, y el beneficiario omitiere denunciar esta circunstancia, a partir del momento en que la autoridad de aplicación tome conocimiento de la misma, se suspenderá o reducirá el pago de la prestación según corresponda. El beneficiario deberá además reintegrar lo cobrado indebidamente en concepto de haberes previsionales, con los accesorios correspondientes, importe que será deducido íntegramente de la prestación que tuviere derecho a percibir, si continuare en actividad; en caso contrario se le formulará cargo en los términos del inciso d) del artículo 14.

El empleador que conociendo que el beneficiario se halla en infracción a las normas sobre incompatibilidad no denunciara esta circunstancia a la autoridad de aplicación, se hará pasible de una multa equivalente a diez (10) veces lo percibido indebidamente por el beneficiario en concepto de haberes previsionales. El hecho de que el empleador no practique las retenciones en concepto de aportes hace presumir, cuando el trabajador fuere el beneficiario de prestación previsional, que aquél conocía la circunstancia señalada precedentemente.

Capítulo IV

Caracteres de las prestaciones

Caracteres de las prestaciones

Artículo 14.- Las prestaciones que se acuerden por el reúnen los siguientes caracteres:

- a) Son personalísimas, y sólo corresponden a sus titulares.
- b) No pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho; alguno, salvo las prestaciones mencionadas en los incisos a) y b) del artículo 17, las que previa conformidad formal y expresa de los beneficiarios, pueden ser afectadas a favor de organismos públicos, asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial, asociaciones de empleadores, obras sociales, cooperativas, mutuales y entidades bancarias y financieras comprendidas en la Ley N° 21.526, con las cuales los beneficiarios convengan el anticipo de las prestaciones o el otorgamiento de créditos. Las deducciones por el pago de obligaciones dinerarias no podrán exceder del CUARENTA POR CIENTO (40%) del haber mensual de la prestación resultante del previo descuento de las retenciones impuestas por las leyes;
- c) Son inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas.

d) Las prestaciones están sujetas a las deducciones que las autoridades judiciales y administrativas competentes dispongan en concepto de cargos provenientes de créditos a favor de organismos de seguridad social o por la percepción indebida de haberes de jubilaciones, pensiones, retiros o prestaciones no contributivas.

Dichas deducciones no podrán exceder del veinte por ciento (20%) del haber mensual de la prestación, salvo cuando en razón del plazo de duración de ésta no resultara posible cancelar el cargo mediante ese porcentaje, en cuyo caso la deuda se prorrateará en función de dicho plazo.

e) Son imprescriptibles, salvo las establecidas en el artículo 17, que se regirán por las normas del artículo 82 de la Ley N° 18.037 (texto ordenado 1976).

f) Sólo se extinguen por las causas previstas por la ley.

Todo acto jurídico que contraríe lo dispuesto precedentemente será nulo y sin valor alguno.

Reapertura del procedimiento. Nulidad

Artículo 15.- Cuando hubiere recaído resolución judicial o administrativa firme, que denegare en todo o en parte el derecho reclamado, se estará al contenido de la misma. Si como consecuencia de la reapertura del procedimiento, frente a nuevas invocaciones, se hiciera lugar al reconocimiento de este derecho se considerará como fecha de solicitud la del pedido de reapertura del procedimiento.

Cuando la resolución otorgante de la prestación estuviere afectada de nulidad absoluta que resultara de hechos o actos fehacientemente probados, podrá ser suspendida, revocada, modificada o sustituida por razones de ilegitimidad en sede administrativa, mediante resolución fundada, aunque la prestación se hallare en curso de pago.

Artículo 16.- El régimen público es un régimen de reparto asistido, basado en el principio de solidaridad intergeneracional. Sus prestaciones serán financiadas con los recursos enumerados en el artículo 18 de esta ley. El Estado Nacional garantiza el otorgamiento y pago de las prestaciones establecidas en esta ley

Artículo 17.- El régimen instituido en el presente título otorgará las siguientes prestaciones:

- a) Prestación Universal
- b) Prestación por vejez
- c) Retiro por Invalidez;
- d) Pensión por Fallecimiento,

Ningún beneficiario tendrá derecho a recibir prestaciones por encima del tope máximo legalmente determinado

Artículo 18.- Las prestaciones del régimen previsional serán financiadas exclusivamente con los siguientes recursos:

- a) Los aportes personales de los afiliados.
- b) Las contribuciones a cargo de los empleadores, establecidas en el artículo 11 de esta Ley.
- c) Dieciséis (16) puntos de los veintisiete (27) correspondientes a los aportes de los trabajadores autónomos.
- d) Los impuestos con afectación específica al ANSES.
- e) Los recursos adicionales que anualmente fije el Congreso de la Nación en la Ley de Presupuesto.
- f) Intereses, multas y recargos.
- g) Rentas provenientes de inversiones.
- h) Todo otro recurso que legalmente corresponda ingresar al régimen previsional público.
- i) El Fondo Previsional Social.

Artículo 19.- Tendrán derecho a la Prestación Universal (PU) todos las personas con residencia mínima de DIEZ (10) años en el país, inmediatamente anteriores al momento de solicitar el beneficio, y que cumplan los siguientes requisitos:

- a) Haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad, y mantener residencia en el territorio nacional, cualquiera fuere su sexo.
- b) No percibir ningún otro beneficio previsional o ayuda social, sea éste otorgado por el Sistema Nacional, Provincial, Municipal o del Exterior; o beneficios de Cajas Profesionales, excepto los beneficios previstos en el incisos b) del artículo 17.
- c) Las mujeres que habiendo cumplido sesenta (60) años de edad tengan derecho a la Prestación por vejez establecidas en esta ley, también tendrán derecho a percibir la Prestación Universal.

Los beneficiarios de pensiones no contributivas o pensiones graciables que hayan cumplido sesenta y cinco (65) años de edad y su haber sea inferior al valor de esta Prestación Universal, podrán optar por uno de los dos beneficios.

Artículo 20.- El monto del haber mensual de la Prestación Universal se igual al setenta por ciento (70%) del haber mínimo jubilatorio.

Artículo 21.- A los fines del artículo 22 de la Ley N° 24.241, serán computables los servicios comprendidos en el presente sistema, como también los prestados con anterioridad. Dicho cómputo comprenderá exclusivamente las actividades desarrolladas hasta el momento de solicitar la Prestación por vejez.

Artículo 22.- Tendrán derecho a la prestación por vejez, los afiliados que se encuadran en los siguientes requisitos:

- a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad.
- b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad.
- c) Acrediten treinta (30) años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.
- d) Acrediten servicios con aportes comprendidos en el sistema de reciprocidad jubilatorio, prestados hasta la fecha de vigencia del presente libro.
- e) No se encuentren percibiendo retiro por invalidez, cualquiera fuere el régimen otorgante.

En cualquiera de los regímenes previstos en esta ley, las mujeres podrán optar por continuar su actividad laboral hasta los sesenta y cinco (65) años de edad.

Al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de ésta prestación se podrá compensar el exceso de edad con la falta de servicios, en la proporción de dos (2) años de edad excedentes por uno (1) de servicios faltantes.

A los efectos de cumplimentar los requisitos establecidos precedentemente, se aplicarán las disposiciones del artículo 31.

Artículo 23.- El haber mensual de las prestaciones por vejez y por invalidez se determinará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- a) Será equivalente al 70 % del promedio mensual de las remuneraciones actualizadas determinado en la forma indicada en los incisos siguientes. El haber se bonificará con el 2 % de dicho promedio por cada año que supere los 65 años de edad cuando los servicios excedan del mínimo de antigüedad requerido para obtener la prestación. La Prestación Universal estará incluida dentro de dicho monto.
- b) Si todos los servicios computados fueren en relación de dependencia, se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante los últimos ciento veinte meses trabajados.
- c) Si todos los servicios con aportes computados fueren autónomos, será calculado sobre el promedio mensual de los montos actualizados de las categorías en que revistó el afiliado. A los referidos efectos, se computará todo el tiempo con aportes computados en cada una de las categorías.
- d) Si se computaren sucesiva o simultáneamente servicios en relación de dependencia y autónomos, el haber se establecerá sumando el que resulte de la aplicación los servicios en relación de dependencia y el correspondiente a los servicios autónomos, ambos en proporción al tiempo computado para cada clase de

servicios, con relación al mínimo requerido para obtener jubilación ordinaria.

Las prestaciones definidas en los incisos b), c) y d) del artículo 17 de esta Ley, no podrán ser inferiores al Haber Mínimo Jubilatorio.

A fin de practicar la actualización de las remuneraciones a que se refiere el inciso a) se aplicará el índice RIPTE publicado por la Secretaria de Seguridad Social o el índice general de salarios publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC si este resultare mayor. La Secretaria de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social establecerá el modo de aplicación del índice correspondiente.

Artículo 24.— Para establecer el promedio de las remuneraciones no se considerará el sueldo anual complementario ni los importes que en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9º excedan el máximo fijado en el primer párrafo del mismo artículo.

Artículo 25.- Fíjese el Haber Mínimo Jubilatorio en el ochenta y dos por ciento (82%) del Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por el Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad.

Capítulo V Disposiciones comunes

Prestación anual complementaria

Artículo 26.— Se abonará una prestación anual complementaria, pagadera en dos (2) cuotas, equivalentes cada una al cincuenta por ciento (50 %) de las prestaciones mencionadas en el artículo 17, en los meses de junio y diciembre.

Cuando se hubiere tenido derecho a gozar de las prestaciones sólo durante parte de un semestre, la cuantía respectiva se determinará en proporción al tiempo en que se devengaron los haberes.

Movilidad de las prestaciones.

Artículo 27.- Las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), del artículo 17 de la presente serán móviles.

El Índice de movilidad será el RIPTE publicado por la Secretaria de Seguridad Social o el índice general de salarios publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC si este resultare mayor, el que será de aplicación semestral conforme lo establezca la reglamentación.

En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.

NOTA AL ARTICULO 27: la Corte Suprema de Justicia instituyó en su reciente fallo sobre la movilidad en los autos “Badaro, Valentín c/ANSES sobre reajustes varios” , comunicado al Congreso de la Nación en agosto de 2006, y en el que solicitara “que, en un plazo

razonable, adopte las medidas a las que se alude en los considerandos”.

La Corte Suprema de Justicia realizó un fallo encomiable en el denominado caso. Sus puntos más importantes son:

a) Reconocer que la movilidad de las jubilaciones es un derecho garantizado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

b) Que la reglamentación del método que fije la movilidad es facultad tanto del Parlamento como del Poder Ejecutivo.

c) Que la reglamentación del criterio de movilidad debe ser razonable y no desconocer el derecho del beneficiario (el jubilado) a una subsistencia decorosa y acorde con la posición que tuvieron durante su vida laboral.

d) Que más allá de las facultades que tiene el Congreso de establecer incrementos en las prestaciones previsionales por vía del Presupuesto, estas deben garantizar que no se lesionen los derechos de los beneficiarios, a riesgo de declarar la inconstitucionalidad de lo que establezca el Presupuesto.

e) Que desde 1995 a la fecha, todos los Presupuestos, confeccionados por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Congreso, han incumplido con la previsión de incremento de las prestaciones y ni siquiera han señalado la existencia de graves razones de interés general que impidiera otorgar los incrementos que la Constitución reconoce.

f) Que la ausencia de criterios que fijen la movilidad del haber en relación con la evolución del salario implica un perjuicio para el beneficiario del sistema previsional que se agudizó a partir de la salida de la crisis de la convertibilidad.

g) En tal sentido el fallo reconoce que “...los cambios en las condiciones de hecho producidos desde el año 2002, trajeron aparejadas variaciones importantes en cualquiera de los indicadores que pueden utilizarse para analizar el mantenimiento o disminución en el nivel de vida del jubilado, y que desde el año 2003 se consolidó un proceso de recuperación de las variables salariales, que no se reflejó en un contemporáneo reconocimiento para la totalidad de las prestaciones jubilatorias...” (punto 9º del fallo).

h) Que los sucesivos aumentos del haber mínimo y del 10% otorgado a las prestaciones por debajo de los \$1.000, si bien implicaron mejoras para las situaciones más urgentes (los considerandos del fallo no tienen en cuenta el último aumento del haber mínimo que otorga un 11% de aumento para todas los tramos), “...en modo alguno podrían llevar a convalidar una postergación indefinida de aquellos que no se encuentran en el extremo

inferior en la escala de haberes ni a admitir graves deterioros de su jubilación...” (punto 11º del fallo).

i) Que “...la política de otorgar incrementos sólo a los haberes más bajos trae como consecuencia el achatamiento de la escala de prestaciones y provoca que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus mayores ingresos se acerquen cada vez más al mínimo, poniendo en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes y quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo...” (punto 12º del fallo).

j) Que la situación de las prestaciones que no han tenido aumentos no constituye un sistema válido de movilidad. La finalidad de la movilidad, garantizada por la Constitución Nacional, es “...acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su valor con relación a los salarios de actividad...” (punto 13º del fallo).

k) Que la movilidad “...no es un reajuste por inflación, sino que es una previsión con profundo contenido social referente a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para la cual es menester que su cuantía, que puede ser establecido de modo diferente según las épocas, mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores...” (punto 15 del fallo).

l) Que si bien es facultad del Congreso fijar la movilidad, si la misma resultara irrazonable, el cumplimiento del espíritu de la movilidad atañe también a los restantes poderes públicos, dentro de la órbita de su competencia.

m) Que la Corte no fija sin más la movilidad que reconoce, “...pues la trascendencia de esa resolución y las actuales condiciones económicas requieren de una evaluación cuidadosa y medidas de alcance general y armónicas, debido a la complejidad de la gestión del gasto público y las múltiples necesidades que está destinado a satisfacer...” (punto 16º del fallo).

n) Que es facultad y deber del Parlamento fijar el contenido concreto de la movilidad ajustándose a lo que fija los art. 75, inc. 19 y 23, en lo relativo a “...proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social...” (punto 17º del fallo).

o) Por ello la Corte resuelve: “... Comunicar al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación el contenido de esta sentencia a fin de que, en un plazo razonable, adopten las medidas necesarias a que se aluden en los considerandos...” (parte resolutive del fallo). Obviamente que se refiere a fijar los criterios de la movilidad.

Sin embargo, y en el marco del debate abierto por el fallo de la Corte, el Gobierno prosigue con su política de otorgar aumentos consistentes en sumas o porcentajes que no guardan relación alguna la dicotomía

entre haberes activos y haberes pasivos, consagrada en el citado fallo. Así, para tomar un ejemplo de esta serie de anuncios, se aumentó en enero del 2007 un 13% a todas los haberes del sistema, por lo que la mínima pasó de \$470 a \$530. Se llega así a \$560 (que es el valor que se había instalado periódicamente como haber mínimo en ese momento) con los \$30 de subsidio sociosanitario que otorga el PAMI.

Con este tipo de medidas el Gobierno pretende cumplir con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo lejos está de poder hacerlo en virtud de que:

a) El aumento del 13% no constituye un criterio de movilidad válido que contemple los incrementos de salarios, de la recaudación previsional o de la evolución de las cuentas públicas.

b) No hay ninguna fórmula que permita inferir el 13%. Es decir no hay fórmula de movilidad que pueda seguirse de acá en adelante, sino que seguirá primando la discrecionalidad e incertidumbre en materia de movilidad.

c) No se revierte el achatamiento de la pirámide previsional ocasionado por los sucesivos aumentos del mínimo desde el 2003 en adelante.

d) El aumento del 13% se da a partir del 2007 y no contempla la deuda acumulada con los jubilados previo y posterior al 2001. (No hay retroactividad)

e) No se utilizan la totalidad de recursos acumulados en el ANSES, así como aquellos otros que podrían utilizarse sin menoscabar la prudencia en el manejo de las cuentas públicas.

Lo expresado vale tanto para este aumento tomado de muestra como para los demás otorgados. Es decir, no está en discusión los montos decididos sino el criterio empleado.

Por ello, estas medidas dispuestas por el Gobierno convalidan el achatamiento previsional a que dio la serie de aumentos que privilegiaron el incremento del mínimo en detrimento del resto de las prestaciones. Como ejemplo, las medidas de incrementos en el sistema previsional para el período 2003-2006 fueron:

- Decreto 391/2003: Eleva el haber mínimo a \$220 a partir del 1ero de julio del 2003.
- Decreto 1.194/2003: Eleva el haber mínimo a \$240 a partir del 1ero de enero del 2004/
- Decreto 683/2004: Eleva el haber mínimo a \$260 a partir del 1ero de junio del 2004 y a \$280 a partir del 1ero de septiembre del 2004.
- Decreto 1.199/2004: Crea el “suplemento por movilidad” que otorga un 10% de incremento para todas las prestaciones inferiores a \$1.000 a partir del 1ero de septiembre del 2004. El haber mínimo pasa a ser de \$308.

- Decreto 748/2005: Eleva el haber mínimo a \$350 a partir del 1ero de julio del 2005.
- Decreto 1.273/2005: Crea un “subsidio complementario” de \$40 hasta completar \$390 en que se fija el nuevo valor del mínimo a partir del 1ero de septiembre del 2005.
- Decreto 764/2006: Eleva el haber mínimo a \$470 a partir del 1ero de junio del 2006 (el aumento absorbe el suplemento por movilidad y el subsidio complementario). Se otorga por primera vez un aumento al resto de las categorías previsionales del 11%.

Estos 9 aumentos, juntamente con los dispuestos para el 2007/2008 configuran una política que ha financiado la recuperación del haber mínimo a expensas del resto de las prestaciones previsionales. Casualmente este era la cuestión que el fallo de la Corte llamaba a resolver y que el Gobierno con el anuncio realizado no alcanza a poner en marcha.

Como puede observarse del Cuadro N° 1, para finales del 2007, el haber mínimo de \$530 significaba un incremento real del orden del 29,7% en relación al 2001 (cabe hacer notar que el aumento real anual tiende a descender a partir del año 2004).

Cuadro N° 1: Evoluciones Nominales y Reales (deflactado por IPC) del haber mínimo de los beneficiarios del Sistema Previsional. 2001 – 2007.

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* | 2007** |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Haber Mínimo | 200 | 200 | 220 | 308 | 390 | 470 | 530 |
| Evolución nominal | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 154.0 | 195.0 | 235.0 | 265.0 |
| Evolución IPC | 100.0 | 141.0 | 146.1 | 155.0 | 174.1 | 190.1 | 204.4 |
| Evolución real del haber mínimo | 100.0 | 70.9 | 75.3 | 99.4 | 112.0 | 123.6 | 129.7 |
| Evolución real anual | | -29.1 | 4.4 | 24.1 | 12.6 | 11.6 | 6.1 |

*se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 9,2% para el 2006 que resulta de anualizar el promedio de los primeros

**se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 7,5% para el 2007 tal como preveé los supuestos con los que el Gobierno trabaja la confección del Presupuesto 2007.

Fuente: Elaboración propia en base a ANSES y datos oficiales del INDEC.

En el Cuadro N° 2 se observa que el aumento real del haber mínimo convive con una caída del haber medio del 3,8% para el 2007. Obsérvese que, más allá de los \$4.100 millones que insumiría la medida de Gobierno y considerando una pauta de crecimiento del IPC durante el 2007 de apenas el 7,5% (que según los trascendidos periodísticos es la hipótesis con que el Gobierno está confeccionando el Presupuesto 2007), el aumento real para el 2007 es prácticamente inexistente

Cuadro N° 2: Evoluciones Nominales y Reales (deflactado por IPC) del haber medio de los beneficiarios del Sistema Previsional. 2001 – 2007.

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* | 2007** |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Haber medio | 328.8 | 327 | 381.2 | 457.6 | 521.2 | 602.5 | 653 |
| Evolución nominal | 100.0 | 99.5 | 115.9 | 139.2 | 158.5 | 183.2 | 198.6 |
| Evolución IPC | 100.0 | 141.0 | 146.1 | 155.0 | 174.1 | 190.1 | 204.4 |
| Evolución real del haber medio | 100.0 | 70.6 | 79.3 | 89.8 | 91.0 | 96.4 | 97.2 |
| Evolución real anual | | -29.4 | 8.8 | 10.5 | 1.2 | 5.3 | 0.8 |

*se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 9,2% para el 2006 que resulta de anualizar el promedio de los primeros

**se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 7,5% para el 2007 tal como preveé los supuestos con los que el Gobierno trabaja la confección del Presupuesto 2007.

Fuente: Elaboración propia en base a ANSES y datos oficiales del INDEC.

La combinación de un incremento real del haber mínimo en el marco de una caída del haber medio indica un desfinanciamiento del sistema previsional. Así, como da cuenta el Cuadro N° 3, a pesar de los 10 aumentos otorgados, la totalidad de recursos destinado al pago de jubilaciones y pensiones se encontrará en el 2007, luego del aumento y suponiendo la pauta benigna del 7,5% de incremento de precios, un 0,8% por debajo del 2001. (puede observarse en este caso, que para el 2005 el aumento real ha sido negativo, mientras que para el 2006 es prácticamente inexistente).

Cuadro N° 3: Evoluciones Nominales y Reales (deflactado por IPC) de las erogaciones realizadas en Jubilaciones y Pensiones desde el 2001al 2007.

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* | 2007** |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Erogaciones en Jubilaciones y Pensiones | 11817.40 | 11887.70 | 12409.20 | 15896.80 | 17813.10 | 19858.10 | 23958.10 |
| Evolución nominal | 100.0 | 100.6 | 105 | 134.5 | 150.7 | 168 | 202.7 |
| Evolución IPC | 100.0 | 141.0 | 146.1 | 155.0 | 174.1 | 190.1 | 204.4 |
| Evolución real de las erogaciones en jubilaciones y pensiones | 100.0 | 71.3 | 71.9 | 86.8 | 86.6 | 88.4 | 99.2 |
| Evolución real anual | | -28.7 | 0.5 | 14.9 | -0.2 | 1.8 | 10.8 |

*se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 12% para el 2006.
**se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 10% para el 2007.
Fuente: Elaboración propia en base a ANSES y datos oficiales del INDEC.

La lógica conclusión de este proceso ha sido el achatamiento de la pirámide previsional. Para ilustrar el proceso cabe tener en cuenta que antes de los aumentos otorgados por la actual gestión el 17% de las jubilaciones y pensiones cobraban el haber mínimo, mientras que en la actualidad lo hace el 65% de los cubiertos. Es decir que se ha incrementado en más de un 280% la proporción de los mayores cubiertos por el haber mínimo.

Llegamos, entonces, al 26 de noviembre de 2007 en que la Corte (ante la inexistencia de respuesta por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo a su fallo del 22 de agosto) vuelve a emitir resolución en los autos *ut supra* mencionados, disponiendo (sobre la pretensión en particular esgrimida por Badaro) que “la prestación del actor se ajuste, a partir del 1 de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos”.

Así por vía jurisprudencial, la Corte estableció un criterio de movilidad. Surge de éste la relación establecida entre los haberes de un trabajador pasivo con el de un trabajador en activo, a través del índice de salarios, índice general, laborado por el INDEC.

Hasta aquí lo que hace a la perspectiva de análisis basada en la conformación del haber: esto es, lo que gana el pasivo. Pero veamos un poco la situación de los fondos previsionales, a partir de la información suministrada por el ANSES.

Cuadro N° 4: Inversiones con instrumentos recibidos desde as AFJP (valuadas al 31/12/2007, según datos suministrados el 27/03/2008).

| Rubro | Total por Rubro |
|---|---------------------|
| Plazos Fijos | \$ 152.054.794,52 |
| Operaciones de Crédito Público con BCRA | \$ 78.008.718,89 |
| Total operaciones crédito público de la Nación | \$ 5.635.632.191,27 |
| Títulos emitidos por entes estatales | \$ 65.998.432,45 |
| Obligaciones Negociables de largo plazo | \$ 87.089.119,14 |
| Obligaciones Negociables de corto plazo | \$ 10.360.556,63 |
| Acciones de sociedades anónimas | \$ 1.079.194.356,51 |
| Acciones de empresas privatizadas | \$ 42.715.857,70 |
| Fondos comunes de inversión | \$ 1.132.560.830,00 |
| Títulos valores extranjeros | \$ 640.715.191,19 |
| Contratos negociables de futuros y opciones | \$ 68.512.272,93 |
| Cédulas y letras hipotecarias | \$ 4.398.630,56 |
| Fondos de inversión directa | \$ 74.565.845,81 |
| Fideicomisos financieros estructurados | \$ 180.147.604,64 |
| Otros fideicomisos financieros | \$ 208.147.720,44 |
| Total de inversiones (originadas en transferencias de AFJP) | \$ 9.560.102.122,49 |

Fuente: Elaboración propia en base a requisitoria hecha al ANSES en el marco del decreto 1172/03.

Estos datos fueron suministrados en respuesta a una solicitud efectuada al amparo del Decreto 1172/03 de Acceso a la Información Pública, mediante Nota 41092/78811. La fecha de la respuesta es del 27 de marzo de 2008, pero la información presenta actualizaciones al

31/12/2007 y al 29/02/2008. El Cuadro N° 4, precisamente, describe las inversiones originadas en transferencias de AFJP: esto es, activos invertidos originariamente por las AFJP que fueran traspasados a la órbita del ANSES, en los que estarían comprendidos el traspaso de 173.944 afiliados en el marco de la Resolución SSS N 135/07, cuyos saldos de cuentas de capitalización individual a la fecha de recepción ascendería a \$ 2.825.665.426,02.

Para mejor entender el crecimiento exponencial que experimentaron los fondos administrados por el ANSES es importante destacar que, a partir de la modificación a la Ley 24.241 que permitió el traspaso entre regímenes, no sólo numerosos afiliados eligieron traspasarse del sistema privado a la jubilación estatal, sino que también se incorporaron a este sistema distintas situaciones como la de regímenes especiales (Poder Judicial, Servicio Exterior, Docentes, Investigadores) sino también mujeres de más de 50 años y hombres mayores de 55 años que en sus cuentas de capitalización acumulaban menos de \$ 20.000.

Cuadro N° 5: Traspasos de afiliados de los distintos regímenes al 31/12/2007, según datos suministrados el 27/03/2008).

| Descripción | Total en afiliados |
|--|--------------------|
| Traspasos de l sistema privado al estatal, en los ciento ochenta días que van del 12/04/2007 al 31/12/2007 | 1.299.770 |
| Incorporaciones al sistema estatal, incluyendo monotributistas, regímenes especiales, y afiliados con edad mayor a la determinada y cuentas de capitalización inferior a \$ 20.000 | 1.225.500 |
| Total de nuevos aportantes desde el 01/01/2008 | 2.525.270 |

Fuente: Elaboración propia en base a requisitoria hecha al ANSES en el marco del decreto 1172/03.

Así, el nuevo mapa previsional habría quedado integrado con un padrón de 9 millones de afiliados para las AFJP y de 5 millones de afiliados para la ANSeS. Y si bien falta aún procesar cuántos de estos afiliados son aportantes regulares, se estima que entre los cotizantes regulares los números habrían quedado parejos: casi 4 millones para cada uno de los sistemas.

Esto significa un incremento de afiliados para el sector público de casi un 55 % desde el 1º de enero, que inevitablemente repercutirá en un incremento sustantivo de la recaudación provisional, de lo cual puede dar una pequeña muestra las cifras volcadas en el Cuadro N° 6, con datos actualizados al 29/2/2007

Cuadro N° 6: Inversiones efectuadas con fondos líquidos excedentes de ANSES (al 29/02/2008, según datos suministrados el 27/03/2008).

| Rubro | Total por Rubro |
|--|----------------------|
| Préstamos para infraestructura | \$ 590.000.000,00 |
| ANSES – Plazos fijos BNA | \$ 4.564.700.000,00 |
| ANSES – Letras del Tesoro | \$ 4.050.000.000,00 |
| ANSES – Letras del Banco Central de la República Argentina | \$ 945.282.200,00 |
| Total de inversiones (Originadas en fondos líquidos excedentes de ANSES) | \$ 10.149.982.200,00 |

Fuente: Elaboración propia en base a requisitoria hecha al ANSES en el marco del decreto 1172/03.

Y ante la lectura de este cuadro, vale conceptualizar aquello de que hay una buena noticia y una mala noticia. La buena es claramente la existencia de más de \$ 10 mil millones en la “Caja Previsional” con un crecimiento que preveemos sostenido durante 2008, alentado por los buenos indicadores de la economía, la baja de la desocupación (estabilizada en alrededor del 10 %) y los aumentos salariales previstos que inciden en la recaudación. La mala es detectar dentro de la inversiones un rubro denominado “Préstamos para infraestructura” que inevitablemente nos trae recuerdos (pésimos) de los últimos sesenta años de políticas previsionales y del destino de los fondos del sistema y de las viejas cajas. Más cuando ese rubro totaliza la nada despreciable suma de \$ 590 millones, sobre cuyo destino no sabemos casi nada.

Sintetizando, el sistema acumulaba al 29/2/2008 casi VEINTE MIL MILLONES DE PESOS, según surge de la sumatoria expresada en el Cuadro N° 7

Cuadro N° 7: Totales de fondos administrados por la ANSES

| Rubro | Total por Rubro |
|--|----------------------|
| Total de inversiones (originadas en transferencias de AFJP) | \$ 9.560.102.122,49 |
| Total de inversiones (Originadas en fondos líquidos excedentes de ANSES) | \$ 10.149.982.200,00 |
| Total de Inversiones | \$ 19.710.084.322,49 |

Fuente: Elaboración propia en base a requisitoria hecha al ANSES en el marco del decreto 1172/03.

Una última reflexión: Si bien hemos esbozado diversas líneas que atañen a modificar la crisis estructural del sistema provisional, lejos estamos de resolverla con estas medidas. Las mismas son necesarias pero no suficientes para resolver la cuestión. El sistema previsional no es ajeno a la lógica

distributiva en la que está inserto. Una economía como la argentina encaminada a perder productividad futura pues basa su crecimiento en exportar naturaleza y trabajo barato, al tiempo que mantiene a la mitad de sus pibes en situación de pobreza no es la que permite tener un sistema previsional que funcione bien. Una economía con apenas el 36% de la fuerza de trabajo en condiciones formales tampoco permite construir un sólido sistema previsional. Una economía donde la participación del salario dentro de la riqueza generada no supera el 25% no puede pretender tener un sistema de seguridad social que se precie de ser redistributivo. Un nuevo proyecto de país que resuelve estos profundos problemas de desigualdad en la distribución del ingreso y que encare una verdadera reindustrialización del aparato productivo es lo que permitirá recuperar el Sistema de Seguridad Social que hemos sabido tener.

Artículo 28.- La misma persona no podrá ser titular de más de UNA (1) Prestación Universal y, en caso de corresponder, de más de UNA (1) Prestación por vejez.

Artículo 29.-

1. Los beneficiarios de prestaciones del Régimen Previsional Público podrán reingresar a la actividad remunerada tanto en relación de dependencia como en carácter de autónomos.

2. El reingresado tiene la obligación de efectuar los aportes que en cada caso correspondan, los que serán destinados al Fondo Nacional de Empleo.

3. Los nuevos aportes no darán derecho a reajustes o mejoras en las prestaciones originarias.

4. Los beneficiarios de prestaciones previsionales que hubieren accedido a tales beneficios amparados en los regímenes especiales para quienes presten servicios en tareas penosas, riesgosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuro, no podrán reingresar a la actividad ejerciendo algunas de las tareas que hubieran dado origen al beneficio previsional. Si así lo hicieren, se le suspenderán el pago de los haberes correspondientes al beneficio previsional otorgado.

5. El goce de la prestación del retiro por invalidez es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia.

6. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en el artículo 12 de la presente ley, el empleador deberá comunicar la situación a que se refiere el apartado 1 de este artículo a la autoridad de aplicación, en el plazo y con las modalidades que la misma establezca. La omisión de esta obligación hará pasible al empleador de una multa equivalente a diez (10) veces lo percibido por el beneficiario en concepto de haberes previsionales.

Capítulo VI

Autoridad de Aplicación, Fiscalización y Control

Facultades y atribuciones

Artículo 30.- La ANSES tendrá a su cargo la aplicación, control y fiscalización del Régimen de Reparto. Corresponderá al citado organismo el dictado de normas reglamentarias en relación a los siguientes ítems:

- a) La certificación de los requisitos necesarios para acceder a las prestaciones estatuidas en el presente título.
- b) La instrumentación de normas y procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en la presente.
- c) El requerimiento de toda información periódica u ocasional a los responsables de la declaración e ingreso de los aportes y contribuciones, necesaria para un adecuado cumplimiento de sus funciones de control.
- d) La concesión de las prestaciones establecidas en el presente título.
- e) El procedimiento para la tramitación de denuncias a que se refiere el apartado 3 del inciso a) del artículo 13.

Esta enumeración es meramente enunciativa, pudiendo el citado organismo realizar todas aquellas funciones no especificadas que hagan al normal ejercicio de sus facultades de administración del Sistema Único de Seguridad Social.

Declaración jurada de servicios con aportes

Artículo 31.- Para el cómputo de los años de servicios con aportes requeridos por el artículo 19 para el logro de la prestación básica universal, sólo podrán acreditarse mediante declaración jurada, como máximo, la cantidad de años que a continuación se indican, según el año de cese del afiliado:

| | |
|-----------|--------|
| 1994..... | 7 años |
| 1995..... | 7 años |
| 1996..... | 6 años |
| 1997..... | 6 años |
| 1998..... | 5 años |
| 1999..... | 5 años |
| 2000..... | 4 años |
| 2001..... | 4 años |
| 2002..... | 3 años |
| 2003..... | 3 años |
| 2004..... | 2 años |
| 2005..... | 2 años |
| 2006..... | 1 año |
| 2007..... | 1 año |

Artículo 32.- Tendrán derecho al retiro por invalidez, los afiliados que:

- a) Se incapaciten física o intelectualmente en forma total por cualquier causa. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en su capacidad laborativa una disminución del sesenta y seis por ciento (66 %) o más; se excluyen las invalideces sociales o de ganancias-

- b) No hayan alcanzado la edad establecida para acceder a la prestación por vejez.

La determinación de la disminución de la capacidad laborativa del afiliado será establecida por una comisión médica cuyo dictamen deberá ser técnicamente fundado, conforme a los procedimientos establecidos en esta ley y los que dispongan el decreto reglamentario de la presente.

No da derecho a la prestación la invalidez total temporaria que sólo produzca una incapacidad verificada o probable que no exceda del tiempo en que el afiliado en relación de dependencia fuere acreedor a la percepción de remuneración u otra prestación sustitutiva, o de un (1) año en el caso del afiliado autónomo.

Artículo 33.-

1. Solicitud.

El afiliado que esté comprendido en la situación indicada en el inciso b) del artículo 32 y que considere estar comprendido en la situación descrita en el inciso a) del mismo artículo, podrá solicitar el retiro por invalidez.

Para efectuar tal solicitud el afiliado deberá acreditar su identidad, denunciar su domicilio real, adjuntar los estudios, diagnósticos y certificaciones médicas que poseyera, las que deberán ser formuladas y firmadas exclusivamente por los médicos asistentes del afiliado, detallando los médicos que lo atendieron o actualmente lo atienden, si lo supiera, así como también la documentación que acredite los niveles de educación formal alcanzados, si la poseyera, y en su defecto una declaración jurada sobre el nivel de educación formal alcanzado.

No se podrá requerir ninguna otra información o documentación de la descrita para dar curso a la solicitud.

Se deberá remitir la solicitud dentro de las 48 horas a la comisión médica con jurisdicción en el domicilio real del afiliado.

2. Actuación ante las comisiones médicas.

La comisión médica analizará los antecedentes y citará fehacientemente al afiliado en su domicilio real denunciado a revisión, la que deberá practicarse dentro de los quince (15) días corridos de efectuada la solicitud.

Si el afiliado no concurriera a la citación, se reservarán las actuaciones hasta que el mismo comparezca.

Si el afiliado diere cumplimiento a la citación o se presentara posteriormente, en primer lugar se le efectuará un psicodiagnóstico completo; el informe deberá contener en sus conclusiones las aptitudes del afiliado para capacitarse en la realización de tareas acordes con su minusvalía psicofísica.

Asimismo si la comisión médica lo considerare oportuno podrá solicitar la colaboración de médicos especialistas en la afección que padezca el afiliado.

Si con los antecedentes aportados por el afiliado y la revisión practicada al mismo por los médicos, éstos no estuvieran en condiciones de dictaminar, la comisión médica deberá en ese mismo momento:

- a) Indicar los estudios diagnósticos necesarios que deben practicarse al afiliado.
- b) Concertar con los profesionales que los efectuarán, el lugar, fecha y hora en que el afiliado deberá concurrir a practicarse los mismos.
- c) Extender las órdenes correspondientes.
- d) Entregar dichas órdenes al afiliado con las indicaciones pertinentes.
- e) Fijar nueva fecha y hora para una segunda revisión del afiliado y
- f) Dejar constancia de lo actuado en un acta que suscribirá el afiliado y los médicos designados por los interesados, si concurrieran.

Los estudios complementarios serán gratuitos para el afiliado y a cargo de la comisión médica, al igual que los de traslado del afiliado para practicarse los estudios complementarios y asistir a las citaciones de la comisión médica, cuando estuviera imposibilitado de movilizarse por sus propios medios. Estos gastos se financiarán conforme a los estipulados en el artículo 35. El afiliado podrá realizar los estudios solicitados y los que considere pertinentes para aportar a la comisión médica con los profesionales que él designe, pero a su costa. Ello no lo releva de la obligación de practicárselos conforme las indicaciones de la comisión médica.

Si el afiliado no concurriera ante la comisión médica a la segunda revisión o lo hiciere sin los estudios complementarios solicitados por la misma, se reservarán las actuaciones hasta que se presente nuevamente

con dichos estudios, en cuyo caso se le fijará nueva fecha de revisación dentro de los diez (10) días corridos siguientes.

Si el afiliado concurriera ante la comisión médica con los estudios complementarios solicitados, la comisión médica, dentro de los diez (10) días siguientes, deberá emitir dictamen considerando verificados o no los requisitos establecidos en el inciso a) del artículo 32, conforme a las normas a que se refiere el artículo 36. Este dictamen deberá ser notificado fehacientemente dentro de los tres (3) días corridos al afiliado a La ANSES

En el supuesto de considerar verificados en el afiliado dichos requisitos por parte de la comisión médica, el trabajador tendrá derecho al retiro transitorio por invalidez a partir de la fecha en que se declare la incapacidad. En este caso el dictamen deberá indicar el tratamiento de rehabilitación psicofísica y de capacitación laboral que deberá seguir el afiliado. Dichos tratamientos serán gratuitos para el afiliado y si éste se negare a cumplirlos en forma regular percibirá el setenta por ciento (70 %) del haber de este retiro.

En caso de existir tratamientos médicos curativos de probada eficacia para la curación de la o las afecciones invalidantes del afiliado, la comisión médica los prescribirá.

Si el afiliado se negare a someterse a ellos o no los concluyera sin causa justificada, será suspendido en la percepción del retiro transitorio por invalidez. Estos tratamientos también serán gratuitos para el afiliado.

Si la comisión médica no emitiera dictamen en el plazo estipulado, el afiliado tendrá derecho al retiro transitorio por invalidez hasta tanto se pronuncie la comisión médica.

El afiliado y la ANSES, podrán designar un mediador para estar presentes y participar durante los actos que realice la comisión médica para evaluar la incapacidad del afiliado. Los honorarios que los mismos irroguen serán a cargo de los proponentes. Estos profesionales tendrán derecho a ser oídos por la comisión médica, presentar los estudios diagnósticos realizados a su costa y una síntesis de sus dichos será volcada en las actas que se labren, las que deberán ser suscriptas por ellos, haciéndose responsables de sus dichos y opiniones, pero no podrán plantear incidencias en la tramitación del expediente.

La comisión médica informará toda actuación realizada a la ANSES.

3. Actuación ante la comisión médica central.

Los dictámenes que emitan las comisiones médicas serán recurribles ante una comisión médica central por:

- a) el afiliado;
- b) la ANSES.

Bastará para ello con hacer una presentación, dentro de los cinco (5) días de notificado el dictamen, consignando que se apela la resolución notificada.

En cuanto a las modalidades y plazos para la actuación en esta instancia, rige íntegramente lo dispuesto en el procedimiento establecido para las comisiones médicas, fijándose un plazo de 48 horas desde la finalización del plazo de apelación para que la comisión médica remita las actuaciones a la comisión médica central.

4. Procedimiento ante la Cámara Nacional de Seguridad Social.

Las resoluciones de la comisión médica central serán recurribles por ante la Cámara Nacional de Seguridad Social por las personas indicadas en el punto 3 del presente artículo y con las modalidades en él establecidas.

La comisión médica central elevará las actuaciones a la Cámara dentro de las 48 horas de concluido el plazo para interponer la apelación.

La Cámara deberá expedirse dentro de los cuarenta y cinco (45) días de recibidas las actuaciones por la comisión médica central, conforme el siguiente procedimiento:

- a) Inmediatamente de recibidas las actuaciones, dará vista por diez (10) días al cuerpo médico forense para que dé su opinión sobre el grado de invalidez del afiliado en los términos del inciso a) del artículo 32, y conforme a las normas a que se refiere el artículo 36;
- b) En casos excepcionales y suficientemente justificados el cuerpo médico forense podrá someter a nueva revisión médica al afiliado y solicitarle nuevos estudios complementarios, los que deberán concluirse en diez (10) días;
- c) Del dictamen del cuerpo médico forense se dará vista al recurrente y al afiliado, por el término de cinco (5) días para que aleguen sobre el mérito de las actuaciones y pruebas producidas;
- d) Vencido dicho plazo, la Cámara dictará sentencia dentro de los diez (10) días siguientes.

Los honorarios y gastos que irroque la apelación ante la Cámara Nacional de Seguridad Social serán soportados por el recurrente vencido.

5. Efecto de las apelaciones.

Las apelaciones en estos procedimientos serán con efecto devolutivo.

6. Fondos para tratamientos de rehabilitación psicofísica y capacitación laboral.

Créase un fondo para tratamientos de rehabilitación psicofísica y capacitación laboral constituido por los recursos que a tal efecto determine el Poder Ejecutivo Nacional, y el treinta por ciento (30%) de haber del retiro transitorio por invalidez que se les descontará a los afiliados que no cumplan regularmente los tratamientos de rehabilitación o capacitación laboral prescritos por la comisión médica.

Este fondo será administrado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y destinado exclusivamente para organizar los programas para implementar los tratamientos prescritos por las comisiones médicas.

Artículo 34.- Los profesionales e institutos que lleven adelante los tratamientos de rehabilitación psicofísica y capacitación laboral deberán informar, en los plazos que establezcan las normas reglamentarias, la evolución del afiliado a las comisiones médicas.

Cuando la comisión médica conforme los informes recibidos, considere rehabilitado al afiliado procederá a citar al afiliado, y emitirá un dictamen definitivo revocando el derecho a retiro transitorio por invalidez. Transcurridos tres (3) años desde la fecha del dictamen transitorio, la comisión médica deberá citar al afiliado, y procederá a la emisión del dictamen definitivo de invalidez que ratifique el derecho al retiro definitivo por invalidez o lo deje sin efecto de un todo de acuerdo con los requisitos establecidos en el inciso a) del artículo 32 y conforme las normas a que se refiere el artículo 36. Este plazo podrá prorrogarse excepcionalmente por dos (2) años más, si la comisión médica considerare que en dicho plazo se podrá rehabilitar el afiliado.

El dictamen definitivo será recurrible por las mismas personas y con las mismas modalidades y plazos que las establecidas para el dictamen transitorio

Artículo 35.- Las comisiones médicas y la Comisión Médica Central estarán integradas por cinco (5) médicos que serán designados: tres (3) por la ANSES y dos (2) por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, los que serán seleccionados por concurso público de oposición y antecedentes. Contarán con la colaboración de personal profesional, técnico y administrativo.

Los gastos que demande el funcionamiento de las comisiones serán financiados por el ANSES y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en el porcentaje que fije la reglamentación.

Como mínimo funcionará una comisión médica en cada provincia y otra en la ciudad de Buenos Aires.

Artículo 36.— Las normas de evaluación, calificación y cuantificación del grado de invalidez a que se refiere el artículo 32, inciso a) estarán contenidas en el decreto reglamentario de la presente ley.

Las normas deberán contener: a) Pruebas y estudios diagnósticos que deban practicarse a las personas, conforme a las afecciones denunciadas o detectadas; b) el grado de invalidez por cada una de las afecciones diagnosticadas; c) el procedimiento de compatibilización de los mismos a fin de determinar el grado de invalidez psicofísica de la persona; d) los coeficientes de ponderación del grado de invalidez psicofísica conforme el nivel de educación formal que tengan las personas; e) Los coeficientes de ponderación del grado de invalidez psicofísica conforme la edad de las personas. De la combinación de los factores de los incisos c), d) y e) deberá surgir el grado de invalidez de las personas.

La autoridad de aplicación convocará a una comisión honoraria para la preparación de las normas de evaluación, calificación y cuantificación del grado de invalidez, invitando a integrarla al decano del cuerpo médico forense, al presidente de la Academia Nacional de Medicina y a los representantes de las universidades públicas o privadas del país. Esta comisión honoraria será convocada por el secretario de Seguridad Social de la Nación, quien la presidirá, dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley y deberá expedirse dentro de los seis (6) meses de constituida.

Pensión por fallecimiento. Derechohabientes

Artículo 37.— En caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante:

- a) La viuda.
- b) El viudo.
- c) La conviviente.
- d) El conviviente.
- e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas, siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos hasta los dieciocho (18) años de edad.

La limitación a la edad establecida en el inciso e) no rige si los derechohabientes se encontraran incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.

Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre en aquél un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular. La autoridad de aplicación podrá establecer pautas objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.

En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá que el o la causante se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia reconocida por ambos convivientes.

El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación personal o al divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.

Transmisión hereditaria

Artículo 38.— En caso de no existir derechohabientes, según la enumeración efectuada en el artículo precedente, se abonará el saldo de la cuenta de capitalización individual a los herederos del causante declarados judicialmente.

Artículo 39.- El activo del fondo de jubilaciones y pensiones se invertirá de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los límites fijados por esta ley y las normas reglamentarias. El Banco de la Nación Argentina podrá invertir el activo del fondo administrado en:

- a) Operaciones de crédito público de las que resulte deudora la Nación a través de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía o el Banco Central de la Republica Argentina, ya sean títulos públicos, Letras Previsionales, hasta el porcentaje que se determine oportunamente del total del activo del fondo.
- b) Títulos valores emitidos por las provincias, municipalidades, entes autárquicos del Estado nacional y provincial, empresas del Estado nacionales, provinciales o municipales, hasta el porcentaje que se determine oportunamente.
- c) Obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores representativos de deuda con vencimiento a más de dos (2) años de plazo, emitidos por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles constituidas en el país y sucursales de sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el porcentaje que se determine oportunamente.
- d) Obligaciones negociables, debentures u otros títulos valores representativos de deuda con vencimiento a menos de dos (2) años de plazo, emitidos por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles, constituidas en el país y sucursales de sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el porcentaje que se determine oportunamente.

- e) Obligaciones negociables convertibles emitidas por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles constituidas en el país y sucursales de sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el porcentaje que se determine oportunamente.
- f) Obligaciones negociables convertibles emitidas por empresas públicas privatizadas, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el porcentaje que se determine oportunamente.
- g) Depósitos a plazo fijo en entidades financieras regidas por la Ley N° 21.526, hasta el porcentaje que se determine oportunamente. Podrá aumentarse en la medida que el excedente se destine a créditos o inversiones en economías regionales.
- h) Acciones de sociedades anónimas nacionales, mixtas o privadas cuya oferta pública esté autorizada por la Comisión Nacional de Valores, hasta el porcentaje que se determine oportunamente. La operatoria en acciones incluye a los futuros y opciones sobre estos títulos valores, con las limitaciones que al respecto establezcan las normas reglamentarias.
- i) Acciones de empresas públicas privatizadas, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el porcentaje que se determine oportunamente.
- j) Cuotapartes de fondos comunes de inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores, de capital abierto o cerrado, hasta el porcentaje que se determine oportunamente.
- k) Contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones sujetos al contralor y supervisión oficial y en las condiciones y sectores que ésta establezca y reglamente, hasta el porcentaje que se determine oportunamente.
- l) Cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y otros títulos valores que cuenten con garantía hipotecaria o cuyos servicios se hallen garantizados por participaciones en créditos con garantía hipotecaria, autorizados a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el porcentaje que se determine oportunamente.
- m) Títulos valores representativos de cuotas de participación en fondos de inversión directa, de carácter fiduciario y singular, con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores, hasta el porcentaje que se determine oportunamente.
- n) Certificados de participación y títulos representativos de deuda de contratos de fideicomisos financieros estructurados constituidos parcial o totalmente por derivados financieros, hasta el porcentaje que se determine oportunamente.
- o) Títulos valores emitidos por fideicomisos financieros no incluidos en los incisos l) m) y n), hasta el porcentaje que se determine oportunamente del total del activo del fondo.
- p) Títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos, activos u otros títulos valores representativos de deuda cuya finalidad sea financiar proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en la República Argentina. Deberá destinar a estas inversiones como mínimo el cinco por ciento (5%) de los activos totales del fondo y hasta un máximo del veinte por ciento (20%). Las inversiones señaladas en este inciso estarán sujetas a los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 40 de esta ley.

Las inversiones señaladas en los incisos b) al m) estarán sujetas a los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 40 de esta ley.

Las normas reglamentarias no podrán fijar límites mínimos para las inversiones señaladas en este artículo.

Queda prohibida la inversión de los fondos en el exterior.

Corresponderá conjuntamente a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la República Argentina la fijación de límites máximos para las inversiones incluidas en los incisos a) al l), siempre que resulten inferiores a los porcentajes establecidos en el presente artículo.

NOTA AL ARTICULO 39:

Senador Gerardo Morales. *El sistema no está basado en que la ANSeS administre financieramente el fondo. Creemos que hay un problema en la administración. De pronto, la ANSeS pasará a administrar un paquete de 120 mil millones de pesos; creemos que el tema tenía que estar realmente descentralizado en cuanto a que la ANSeS administre altas y bajas y produzca el pago de las obligaciones del sistema, pero que otro organismo — hemos planteado que sea el Banco de la Nación Argentina o la AFJP residual— sea quien realice, con la capacidad técnica, con el rigor técnico que implica la grilla de inversiones del artículo 74 y con todas las limitaciones que estamos planteando, las inversiones que impidan la desvalorización del fondo. Es decir, la solución la aportan los 22 artículos de la ley. Sin embargo, decimos que es precaria para el cambio que pretende el sistema. Uno de los temas importantes está en la gran concentración de funciones y de la administración de fondos que tendrá a su mano la ANSeS sin tener la capacidad técnica y el rigor que AFJP*

Nación o que el Banco de la Nación Argentina, en todo caso, podrían tener. Por eso, uno de los temas que nos planteamos cuando vemos el texto del proyecto de ley se refiere a cuáles son —esta es la primera pregunta en el marco de la exposición breve que pretendemos hacer sobre la posición del radicalismo— las normas que quedan vigentes. ¿Queda vigente el artículo 78 de la ley 24.241, que establece las inversiones del 74, de acuerdo a las prohibiciones y limitaciones que establece el 75 y el 76? ¿Queda vigente el 78 que dice que las colocaciones de títulos tiene que ser en la medida en que se cumpla con los requerimientos de cotización en el mercado y de la Bolsa de Valores? Es decir, ¿existe el rigor para todas las inversiones aun de títulos públicos todavía con relación a calificadoras de riesgos y todos los requisitos que garanticen el recupero de estas inversiones y una tasa de rentabilidad para que no se deprecie el fondo? Vemos que el texto del proyecto —aun precario— genera inseguridad jurídica porque no tiene buena técnica legislativa. El primer artículo dice: se elimina el actual régimen de capitalización. ¿Se elimina entonces todo el título de la ley? En todo caso, tenía más lógica, aunque era muy delegativo de facultades, el último o anteúltimo artículo, el artículo 17, del proyecto del Poder Ejecutivo que —en la lógica de un cambio de normas de un régimen vigente en 183 artículos— decía lo siguiente: “Encomiéndose al Poder Ejecutivo nacional la elaboración del texto ordenado de la ley 24.241 y sus modificatorias, debiendo adecuar las mismas a lo establecido por la presente ley. Asimismo, podrá disponer la supresión de aquellas disposiciones que a la fecha del ordenamiento hayan perdido actualidad.” Artículo que está en la lógica de un texto ordenado, desde ya delegativa de grandes facultades porque se lo autorizaba al Poder Ejecutivo a eliminar normas que el Poder Ejecutivo diga que son contradictorias con el texto. Pero este artículo no existe. Al no estar este artículo, que le daba lógica en cuanto a la técnica legislativa, no se sabe cuáles son los capítulos que están vigentes. Está vigente el artículo 78, que es el que le da rigor de control en el mercado de valores a las inversiones que se realicen en títulos y valores. No resuelve el problema, que es la cuestión que nos planteamos desde la oposición. ¿Para qué se van a utilizar los fondos? Es decir, ¿habrá discrecionalidad? Esta es una de las cuestiones.

Del proyecto, de los 22 artículos, aparece otro gran capítulo. Recordemos que el primer gran capítulo es la ANSeS con todas las funciones y administrando 120 mil millones de capital más un flujo de 15 mil millones de pesos anuales. El tema es, si está vigente el artículo 78, por qué no se han generado mayores restricciones al tema de las inversiones en letras del Tesoro, por qué no acotar cuál será la tasa de interés; los jubilados y trabajadores van a querer saber si no se deprecia realmente el fondo que va a venir a atender a las presentes y futuras generaciones. Ese es el tema, la discrecionalidad.

¿Sigue vigente el título III? ¿Siguen vigentes las normas de penalización? ¿Son extensivas a los funcionarios públicos, que ahora ya no son tratados con el carácter de la ley 24.241 sino que son administradores de fondos, según el rigor de las inversiones a las que los sujetaba el artículo 74? ¿Está bien que los porcentajes del artículo 74 sigan existiendo? Me refiero a los determinados porcentajes para determinados tipos de inversiones. Estos son los debates que importan para tratar a fondo el sistema previsional. Es por ello que nosotros decimos que estamos de acuerdo con tratar el tema, y lo cierto es que tomamos el desafío del gobierno. Discutamos un cambio de régimen, pero hagámoslo en forma completa. El ministro empezó hablando bien del tema de la crisis financiera internacional. Es lógico. La situación de la crisis financiera internacional produjo muchos efectos y los va a seguir produciendo sobre nuestra economía. De hecho, uno de los argumentos más fuertes del gobierno es que la crisis financiera internacional ha generado una depreciación de los títulos que, obviamente, han caído en el mundo. Por ende, también cayeron los títulos de las inversiones de los fondos de los trabajadores. Desde ya, me parece que ese es el argumento más fuerte del gobierno. Eso está claro. ¿Por qué, en lugar de una modificación del régimen estructural previsional que podría trabajarse en seis meses, no planteamos ese tema?

Sr. Boudou. — Con respecto a si se elimina todo el título, no. No lo elimina, claramente. Hay muchas normas a las que se hace referencia, como por ejemplo en materia de prohibiciones y límites, que quedan vigentes. También en el tema del menú de inversiones, que también queda vigente. Esto tiene que ver, ya que se hizo varias veces referencia a este punto, con que el stock viene preinvertido. Y cambiar esos porcentajes requeriría de movimientos muy importantes en los mercados financieros, que destruirían el valor de algunos títulos o generaría convulsiones aún peores con respecto al valor de algunos títulos valores. Por eso, se optó por tomar el mismo menú de inversiones que tenía el Sistema de Capitalización, con la salvedad de que no pueden hacerse inversiones en el exterior, y con la otra salvedad de preservar el piso que se le pusieran a las inversiones en el sector productivo. Me refiero a un piso del 5 por ciento, que debe ir cumpliéndose desde el 1 por ciento en adelante, teniendo en claro que en el primer año de las AFJP para acumular ese piso no lo cumplieron. Esto venció el último día del mes pasado. De todas maneras, nosotros pensamos que esto —tal como señalara el senador Sanz— es muy importante que parte de estos fondos vayan a actividades productivas y de infraestructura. Porque hay que pensar que en este caso habría una rentabilidad para el sistema por dos lados. Uno, por el valor que tuviera nominalmente ese título que se emitiera. Por otro lado, si nosotros enfocáramos inversiones, como hemos venido tratando de hacerlo desde la ANSeS, hacia sectores que sean mano de obra intensiva, habría una segunda rentabilidad para la seguridad social, que es la mayor actividad de aportes y contribuciones que genera esto dentro del sistema. Por lo tanto, tiende a fortalecerlo y a aumentar el financiamiento en el futuro. Con respecto al punto de las calificadoras de riesgo, nosotros no estamos de acuerdo con que tengan que ser las calificadoras de riesgo las determinantes de las inversiones. ¿Por qué? Porque sería poner la discrecionalidad en otro lugar. Acá, a veces nos llama un poco la atención cuando se habla de la potencial discrecionalidad del Estado y se pierde de vista que hubo actores privados con sus intereses genuinos o no, han tomado y calificado inversiones con discrecionalidad. Algunas veces, no sólo en la Argentina sino en el mundo, acciones o títulos valores que tenían muy buenas calificaciones desaparecieron de un día para el otro. Basta citar el caso “Enron”, para ir a uno lejano, o el caso “Lehman” para ir a uno más cercano. La verdad es que resulta triste ver como el mismo día una calificadora le bajaba a la República Argentina su calificación para el repago de su deuda y, al día siguiente, subían los bonos de nuestro país.

Así que es una opinión. Tal vez sea importante, pero para nosotros no debe ser la determinante de las inversiones que se realicen, por estos motivos que expuse. Con respecto a la seguridad jurídica, entiendo que se refiere a los potenciales juicios de trabajadores que tenían una cuenta de capitalización individual y pasan al seguro colectivo, al seguro solidario del Sistema de Reparto, que usted no solo elogió sino que dijo con claridad lo mismo que pensamos nosotros. O sea, que siempre va a ser mayor el valor que recibe una jubilación del Sistema de Reparto, comparada con la potencial que puede recibir del Sistema de Capitalización. Creo que en el espíritu de lo que usted decía compartimos que esto siempre es así, y mucho peor es un período de turbulencia financiera, porque además está aquel viejo dicho de que el Estado va a estar siempre, mientras tanto veremos, lamentablemente, qué pasa con los títulos y valores. Nos es que nos pongan contentos, pero hemos visto en términos numéricos cómo bajaban los valores de esos activos. La evaluación que nosotros hacemos respecto de esta propiedad, que como bien dijera es una propiedad en expectativa —porque si no, uno podría ir a la AFJP y retirar hoy todo el dinero, si fuera una propiedad privada—, es que se tienen que cumplir

una gran cantidad de requisitos previsionales para que ese derecho previsional que se está construyendo con el aporte mensual se convierta en un derecho jubilatorio. Tan propiedad como eso son los aportes que tiene un trabajador en el Sistema de Reparto. También están nominados, y también son un número que sale de calcular un porcentaje sobre el salario bruto y también serán estos los determinantes, en el futuro, del valor de la jubilación. Entonces, además de compartir todos estos conceptos, la evaluación que hacemos desde el Poder Ejecutivo es que el valor que va a recibir un trabajador por el reconocimiento del 11 por ciento de cada mes trabajado y del 1,5 por ciento de prestación adicional por permanencia como trabajador es mayor que el valor que tendrá en su cuenta de capitalización individual, aún habiendo capitalizado con el paso del tiempo. ¿Por qué? Por dos cuestiones objetivas: en primer lugar, porque no existen comisiones, por lo cual no se le detrae nada al trabajador, más allá de que alguna vez las pagó; y por otro lado, porque va a ser reconocido el 11 por ciento por cada mes trabajado sobre el salario bruto. Estos dos hechos objetivos y concretos, más allá de otras cuestiones objetivas como la caída por valor de la Bolsa y de los valores de la cuenta de capitalización individual, hacen que el valor que va a recibir el trabajador respecto a ese derecho en expectativa en el sistema de reparto es siempre mayor que el valor que tenía en su cuenta de capitalización individual. Entonces, si bien es probable que algún ciudadano se presente a reclamar por ello, nosotros entendemos que no va a haber agravio porque el monto reconocido va a ser mayor que el que tenía antes.

Sr. Sanz. – Vuelvo sobre el particular de la Ley 24.241, pero es solamente para fijar conceptos, porque lo que aquí se pregunta y lo que ustedes puedan responder queda registrado. Por lo menos para quienes pensamos que la ley necesita más aclaraciones,

las respuestas de ustedes van formando lo que se llama el espíritu del legislador, que luego, en temas de interpretación, no es una cosa menor. De todo el Título III –recién el licenciado Boudou decía que no se derogaba–, a nosotros nos importa específicamente el Capítulo 5º, que abarca el artículo 74 y los siguientes, que es el de las inversiones. Luego de eso, una cuestión sobre el Título V de la Ley 24.241, que habla de las penalidades. En verdad, creemos que muchas otras disposiciones, tanto del Título III como de otros, quedan de hecho derogadas, porque se contraponen... Ahí empieza a regir el artículo 20 del proyecto de la media sanción. Teniendo en cuenta que hoy los componentes de los recursos del sistema son los aportes y contribuciones, los impuestos y la coparticipación federal o la cesión que hicieron las provincias de aquel 15 por ciento en la década de los '90, quería formular la siguiente pregunta. ¿Hay un cálculo actuarial –por supuesto, no le voy a poner fecha; y espero que ustedes me digan si lo hay y hasta dónde llega– para tener una idea de cuál va a ser la influencia en el nuevo esquema de estos tres componentes?

Sr. Boudou. – Respecto del capítulo de las penalidades, por supuesto que queda vigente. No soy abogado, pero quedan vigentes los castigos penales ante el incumplimiento de esos términos. Como le decía antes, el menú de inversiones es exactamente el que está ahí, eliminando la posibilidad de hacer inversiones en el exterior. Las prohibiciones y limitaciones quedan vigentes con respecto al uso de calificadoras como único árbitro de las decisiones de este tipo.

Sr. Morales. – Para precisar el tema, lo único que está vigente del Capítulo 5º es el artículo 74, el 75 y el 76...

Sr. Boudou. – Prohibiciones y licitaciones. Lo otro no. Respecto a la Comisión Nacional de Valores, que todos los títulos tengan que... (se interrumpe unos instantes el audio) ... es una buena idea, porque tiene que ver muchas veces con inversiones, públicas o privadas, de municipios o provincias; y no debe ser una restricción que coticen o no en Bolsa. Respecto del cálculo actuarial, el día viernes recibimos un pedido por parte del bloque radical, por lo que el día miércoles vamos a estar haciendo una presentación. Versión taquigráfica, Plenario de Comisiones, 10/11/2008

Artículo 40.-

- a) Las inversiones en obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores representativos de deuda correspondientes a emisores argentinos, estarán sujetos a las siguientes limitaciones:
 - 1) En ningún caso la suma de las inversiones en los títulos enumerados en los incisos d), e) y f) del artículo 39 correspondientes a una sola sociedad emisora, podrá superar la proporción que sobre la suma del total de las inversiones del fondo en dichos conceptos y/o la proporción que sobre el pasivo instrumentado en los referidos títulos por dicha sociedad y/o la proporción que sobre el activo total del fondo, establezcan las normas reglamentarias.
 - 2) En ningún caso la suma de las inversiones en los títulos enumerados en los incisos c), d), e) y f) del artículo 39 podrá superar el porcentaje que se determine oportunamente del activo del fondo.
- b) Las inversiones en acciones correspondientes a emisores argentinos, estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
 - 1) En ningún caso la suma de las inversiones realizadas en acciones de acuerdo con lo establecido en los incisos h) e i) del artículo 39 correspondientes a una sola sociedad emisora, podrá superar la proporción que sobre la suma total de las inversiones del fondo en dichos conceptos y/o la proporción que sobre el capital social de la emisora y/o la proporción que sobre el activo total del fondo, establezcan las normas reglamentarias.
 - 2) En ningún caso la suma de las inversiones realizadas en acciones de acuerdo con lo establecido en los incisos h) e i) del artículo 39, podrá superar el porcentaje que se determine oportunamente del activo del fondo.
 - 3) Las limitaciones a que se refieren los incisos anteriores podrán excederse transitoriamente en los casos que determinen las normas reglamentarias, debiendo restablecerse los límites correspondientes en los plazos que fije la Comisión Nacional de Valores.
- c) Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión estarán sujetas a las siguientes limitaciones: En ningún caso las inversiones en cuotapartes de un fondo común de inversión establecidas el inciso j) del artículo 39 podrán superar la proporción que sobre el total de las inversiones efectuadas

por el fondo en este concepto y/o la proporción que sobre el patrimonio del fondo común de inversiones, establezcan las normas reglamentarias.

- d) En ningún caso las inversiones establecidas en el inciso g) del artículo 39 depositadas en una sola entidad financiera podrán superar la proporción que sobre el total de la inversión efectuada en depósitos a plazo fijo por el fondo, establezcan las normas reglamentarias.
- e) En ningún caso las inversiones realizadas en una sociedad nacional habilitarán para ejercer más del cinco por ciento (5 %) del derecho de voto, en toda clase de asamblea, cualquiera sea la tenencia respectiva.
- f) En ningún caso las inversiones establecidas en el inciso l) del artículo 39 correspondientes a una sola sociedad emisora, podrá superar la proporción que sobre la suma total de las inversiones del fondo en dichos conceptos y/o la proporción que sobre el pasivo instrumentado en los referidos títulos y/o la proporción que sobre el activo total del fondo, establezcan las normas reglamentarias.
- g) En ningún caso las inversiones en cuotapartes de un fondo de inversión directa establecidas en el inciso m) del artículo 39 podrán superar la proporción que sobre el total de las inversiones efectuadas por el fondo en este concepto y/o la proporción que sobre el patrimonio del fondo de inversión directa, establezcan las normas reglamentarias.
- h) En ningún caso la suma de las inversiones en títulos públicos correspondientes al inciso a) del artículo 39 podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del activo del fondo.

Todas las inversiones que por su naturaleza respondan a las características de los activos definidos en los incisos n) u o) del artículo 39 y que estén respaldadas por títulos públicos adquiridos en compra primaria al Gobierno Nacional deberán hallarse dentro de los límites del inciso a) del artículo 39.

Artículo 41.- El activo del fondo, en cuanto no deba ser inmediatamente aplicado, según lo establecido en el artículo 39 y las condiciones y situaciones especiales que fijen las normas reglamentarias, será depositado en entidades bancarias en cuentas destinadas exclusivamente al fondo, en las que deberá depositarse la totalidad de los aportes de los afiliados, el producto de las inversiones y las transferencias del encaje.

De dichas cuentas sólo podrán efectuarse extracciones destinadas a la realización de inversiones para el fondo y al pago de las prestaciones,

Las cuentas serán mantenidas en entidades financieras bancarias autorizadas por la Ley N° 21.526 y calificadas para recibir esta clase de depósitos por el Banco Central de la República Argentina.

El Banco de la Nación Argentina podrá delegar en sociedades inscriptas en el Registro de Sociedades Calificadoras de Riesgo previsto en el artículo 5° del Decreto N° 656/92, la calificación descrita en el párrafo precedente, dictando las normas correspondientes a dicha calificación.

Artículo 42.- Todos los títulos valores, públicos o privados que puedan ser objeto de inversión por parte del Fondo Previsional Social, deben estar autorizados para la oferta pública y ser transados en mercados secundarios transparentes que brinden diariamente información veraz y precisa sobre el curso de las cotizaciones en forma pública y accesible al público en general.

La Comisión Nacional de Valores determinará los mercados que reúnen los requisitos enunciados en este artículo.

Se exceptúa de la exigencia establecida en este artículo a las Letras Previsionales que podrá suscribir el Tesoro Nacional, por hasta un monto equivalente al diez por ciento (10%) del activo del fondo. Las letras Previsionales tendrán una duración de un (1) año amortizables completamente al final del período y devengarán una tasa de interés que no podrá ser inferior a la tasa promedio de los títulos públicos en la cartera del fondo al momento de la suscripción, ajustada por su duración. Las Letras Previsionales tienen garantía de la recaudación tributaria correspondiente a la Nación. Si al vencimiento de las Letras Previsionales quedaran saldos no cancelados, el Banco de la Nación transferirá automáticamente al fondo todos los recursos tributarios correspondientes a la Administración Central, a medida que ingresen, hasta la cancelación definitiva

Artículo 43.- Las inversiones enunciadas en el artículo 39, incisos b) y g) deberán estar previamente calificadas por el Banco Central de la República Argentina como susceptibles de ser adquiridas con los recursos del Fondo Previsional Social

A los efectos de la calificación el Banco Central de la República Argentina dictará la reglamentación correspondiente, la que atenderá a las garantías, plazo, responsabilidad patrimonial de las entidades emisoras, condiciones de los mercados mundiales en cuanto a la libertad de cambios y todo otro requisito que tienda a resguardar la seguridad y aceptable rentabilidad de las inversiones.

El Banco Central de la República Argentina podrá delegar en sociedades inscriptas en el Registro de Sociedades Calificadoras de Riesgo previsto en el artículo 5° del Decreto N° 656/92, la calificación prescripta en los párrafos precedentes.

Los títulos valores privados enunciados en los incisos c), d), e), f), h), j) y l) del artículo 39 deberán haber sido objeto de calificación previa por sociedades inscriptas en el Registro de Sociedades Calificadoras de Riesgo previsto en el artículo 5° del Decreto N° 656/92.

La Comisión Nacional de Valores dictará las normas regulatorias de la actividad clasificadora prevista en esta ley, en concordancia con lo establecido en el Decreto N° 656/92.

Las normas reglamentarias deberán atender a las condiciones de garantía de los títulos, no solamente en relación a aquellas garantías especiales que pudieran contener sino también a las que responden a la organización y administración de la sociedad, la existencia de accionistas mayoritarios, enunciación de su política de inversiones y distribución de utilidades y una adecuada apertura del capital.

En el caso de los fondos comunes de inversión se tendrá especialmente en cuenta el grado de diversificación de riesgo de su cartera así como las características especiales del fondo en cuanto a su política de inversión.

En el caso de los fondos de inversión directa se tendrá en cuenta la naturaleza y demás características de los proyectos de inversión, que a través de los mismos se encaren, así como también la solvencia técnica y económica de sus operadores y todo otro elemento relevante para evaluar el riesgo de los mismos.

Las calificaciones efectuadas por las sociedades calificadoras de riesgo, serán presentadas a la Comisión Nacional de Valores para su aprobación, si ello es exigido por las normas reglamentarias, de acuerdo con las disposiciones que al respecto en ellas se incluyan.

Las inversiones establecidas en los incisos f) e i) del artículo 39 no requerirán de calificación de riesgo durante el período comprendido entre la efectiva privatización de la empresa y la fecha de presentación de los estados contables correspondientes del primer cierre de ejercicio de una nueva sociedad. La reglamentación establecerá las normas a las cuales las carteras de los fondos de jubilaciones y pensiones deban ajustarse, una vez que las sociedades sean calificadas.

Artículo 44.- El control de las inversiones realizadas por el Fondo Previsional Social corresponderá a la Auditoria General de la Nación, que deberá contar con un equipo permanente y el presupuesto pertinente para este fin, a cargo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para lo cual se suscribirá el pertinente convenio de auditoria

Artículo 45.- Los títulos representativos de las inversiones del fondo de jubilaciones y pensiones y del encaje deberán ser mantenidos en todo momento en un depósito cuyo titular podrá ser una caja de valores autorizada por la Comisión Nacional de Valores, o una de las entidades bancarias que el Banco Central de la República Argentina determine.

Mensualmente la entidad depositaria será responsable por cualquier retiro de títulos depositados en custodia si con ello deja de cumplirse con la obligación establecida en el presente artículo.

A los fines de la validez de la enajenación o cesión de los títulos de propiedad del fondo, la misma deberá ser efectuada mediante la entrega del título debidamente endosado en su caso, y cuando fuere nominativo no endosable o escritural, con la respectiva notificación al emisor.

Artículo 46.- Serán de aplicación para la determinación de las prestaciones de los beneficiarios de pensión y del haber de las pensiones por fallecimiento, los porcentajes que en el presente artículo se detallan, los que se aplicarán de acuerdo con las siguientes normas:

1. Para la determinación de las prestaciones de los beneficiarios de pensión, establecidas en el artículo 37, los porcentajes se aplicarán sobre la prestación de referencia del causante determinada en el artículo 23;
2. Para la determinación del haber de las pensiones por fallecimiento del afiliado en actividad, los porcentajes se aplicarán sobre la prestación de referencia del causante determinada en el artículo 23;

Los porcentajes a que se hace referencia serán:

- a) El setenta por ciento (70%) para la viuda, viudo o conviviente, no existiendo hijos con derecho a pensión;
- b) El cincuenta por ciento (50%) para la viuda, viudo o conviviente, cuando existan hijos con derecho a pensión;
- c) El veinte por ciento (20%) para cada hijo.

Además de los porcentajes enunciados se deberán tener en cuenta las siguientes pautas:

- I. Si no hubiera viuda, viudo o conviviente con derecho a pensión, el porcentaje de haber de la pensión del o los hijos establecido en el inciso c) se incrementará distribuyéndose por partes iguales el porcentaje fijado en el inciso b).

- II. La suma de las pensiones de todos los beneficiarios no podrá exceder el ciento por ciento (100%) de la prestación del causante. En caso de que así ocurriera, la pensión de cada uno de los beneficiarios deberá recalcularse, manteniéndose las mismas proporciones que les correspondieran de acuerdo con los porcentajes antes señalados.
- III. Si alguno de los derechohabientes perdiera el derecho a la percepción del beneficio, se recalculará el beneficio de los otros derechohabientes con exclusión de éste, de acuerdo a lo establecido en este inciso.

Artículo 47.- Créase la Superintendencia de Administración del Fondo Previsional Social.

El control del Fondo Previsional Social estará a cargo de la Superintendencia, con las funciones y atribuciones establecidas en la presente ley y su decreto reglamentario. La misión de la Superintendencia es supervisar el estricto cumplimiento, de esta ley y de las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten; procurar prevenir sus eventuales incumplimientos y actuar con rapidez y eficiencia cuando estos incumplimientos se verifiquen, en salvaguarda exclusiva y excluyente de los intereses de las personas incorporadas al SIPA como aportantes

La Superintendencia es una entidad autárquica con autonomía funcional y financiera, en de la Auditoría General de la Nación

Artículo 48.- Son deberes de la Superintendencia:

- a) Ejercer las funciones que esta ley y su decreto reglamentario asigna a la autoridad de control.
- b) Dictar las resoluciones de carácter general y particular en los casos previstos en esta ley, su decreto reglamentario y las que sean necesarias para su aplicación.
- c) Fiscalizar las inversiones de los recursos de los fondos de jubilaciones y pensiones y la composición de la cartera de inversiones.
- d) Dictar las resoluciones referidas al tipo, medio y periodicidad de la información que el agente fiduciario debe suministrar a la Superintendencia.
- e) Fiscalizar las habilitaciones de los directores, síndicos, representantes y gerentes que en tal carácter se incorporen el agente fiduciario, llevando un registro de antecedentes personales actualizado de los directores, síndicos, representantes y gerentes.
- f) Fiscalizar la constitución y mantenimiento del capital de la entidad.
- g) Determinar la rentabilidad promedio del sistema.

Artículo 49.- Para el cumplimiento de sus deberes, la Superintendencia tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

- a) Ejercer las funciones que esta ley y su decreto reglamentario asigna a la autoridad de control.
- b) Dictar las resoluciones de carácter general y particular en los casos previstos en esta ley, su decreto reglamentario y las que sean necesarias para su aplicación.
- c) Adoptar las resoluciones necesarias para hacer efectiva la fiscalización respecto del agente fiduciario, tomar las medidas y aplicar las sanciones previstas en esta ley y sus normas reglamentarias.
- d) Examinar todos los elementos atinentes a las operaciones del agente fiduciario y en especial requerir la exhibición general de los libros de comercio y documentación complementaria, así como de su correspondencia, hacer compulsas, arqueos y verificaciones.
- e) Requerir otras informaciones que juzgue necesarias para ejercer sus funciones. La Superintendencia puede requerir declaraciones juradas sobre hechos o datos determinados. Las obligaciones que surgen de este inciso y del anterior comprenden a los directores, síndicos, representantes y gerentes del agente fiduciario.
- f) Requerir a toda persona física o jurídica las informaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de su misión, aun cuando estén sujetas al control de otros organismos estatales, nacionales, provinciales o municipales, conforme las leyes específicas, y a exhibir sus libros de comercio y documentación complementaria a inspectores de la Superintendencia, cuando ello sea necesario para determinar su situación frente al régimen de esta ley o bien establecer las condiciones en que operan con agente fiduciario autorizado, no pudiéndosele oponer a la autoridad de control el deber de secreto o confidencialidad de la información.

g) Requerir órdenes de allanamientos y el debido e inmediato auxilio de la fuerza pública para el ejercicio de sus funciones; secuestrar los documentos e información contenida por cualquier medio para el cumplimiento de sus tareas de fiscalización, iniciar acciones judiciales y actuar en cualquier clase de juicios como actor o demandado, en juicio criminal como querellante y designar apoderados a estos efectos.

i) Dictar su propio reglamento interno, determinar su estructura organizativa y el régimen de atribución de funciones a sus funcionarios.

j) Nombrar, contratar, promover, separar y sancionar a su personal, y adoptar las demás medidas internas que correspondan a su funcionamiento.

k) Tendrá total facultad para el manejo de su patrimonio y para dictar su reglamento de compras y contrataciones.

Artículo 50.- Las actuaciones cumplidas en el ejercicio del control previsto en esta ley, son confidenciales. También son confidenciales los datos que no estén destinados a la publicidad y las declaraciones juradas presentadas. Los funcionarios y empleados están obligados a conservar fuera del desempeño de sus funciones el secreto de las actuaciones. Su incumplimiento será considerado como falta grave.

Artículo 51.- La Superintendencia estará a cargo de un funcionario designado por la Auditoría General de la Nación con el título de superintendente.

La Superintendencia estará dotada con la cantidad de funcionarios y empleados técnicos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

No podrán integrar la Superintendencia los inhabilitados, sin perjuicio de las normas de incompatibilidad vigentes.

Las remuneraciones y beneficios que perciba el superintendente, los funcionarios y los empleados técnico.— administrativos de la Superintendencia no serán inferiores al promedio de las remuneraciones y beneficios que perciban los directores, gerentes, personal superior y empleados de la ANSES.

Artículo 52.- Los gastos que demande el funcionamiento de la Superintendencia serán financiados con aportes de la ANSES.

Los bienes inmuebles, muebles y equipamiento técnico adecuado que deberá proveerle para su funcionamiento el Estado nacional.

El presupuesto de la Superintendencia no integrará el presupuesto nacional.

Artículo 53.- El superintendente será penalmente responsable por las acciones y omisiones indebidas en que incurriere en el ejercicio de sus obligaciones y deberes.

Todo funcionario de la Superintendencia que en violación de los deberes a su cargo causare en perjuicio al fondo, será penalmente responsable por dicho perjuicio.

Título II Vigencia

Vigencia

Artículo 54.- Las disposiciones del presente libro entrarán en vigor en la fecha que fije el Poder Ejecutivo, la que no podrá ser establecida en un plazo menor a nueve (9) meses, ni mayor a dieciocho (18) meses, contados a partir de la promulgación de esta ley.

Hasta la fecha aludida en el párrafo anterior, continuarán aplicándose las disposiciones legales vigentes hasta ese momento, con las modificaciones introducidas por la presente ley.

Proceso de incorporación

Artículo 55.- Las normas reglamentarias deberán prever los procedimientos, plazos y modalidades que hagan factible la incorporación a este régimen de las personas que a la fecha de su entrada en vigor quedaren comprendidas en el mismo, así como los de quienes ejerzan la opción a que se refiere el artículo 30.

Financiamiento de la Superintendencia

Artículo 56.- Los gastos que demande el cumplimiento de las funciones de la Superintendencia creada por artículo 47, durante el período que transcurra entre la promulgación de la presente y la fecha de entrada en vigor de este libro, se incluirán en un presupuesto transitorio y serán financiados con recursos provenientes de la ANSES.

Título III Penalidades

Capítulo I Delitos contra la Integración de los Fondos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones

Infracciones al deber de información

Artículo 57.- Será reprimido con prisión de 15 días a un año el empleador que, estando obligado por las disposiciones de esta ley, no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en los incisos a), b), e) o i) del artículo 12. El delito se configurará cuando el obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los treinta (30) días de notificada la intimación respectiva en su domicilio real o en el asiento de sus negocios.

Infracción al deber de actuación como agente de retención o percepción, al deber de depósito y evasión de aportes y contribuciones.

Artículo 58.- Las infracciones del empleador establecidas en el acápite, serán reprimidas conforme lo prescrito por la Ley N° 23.771, sus modificaciones y sustituciones y el Código Penal.

Capítulo II Delitos contra la Adecuada Imputación de los Depósitos al S.I.J.P.

Omisiones de transferencia de depósitos

Artículo 59.- Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el depositario de los aportes y contribuciones que estuviera obligado por esta ley a transferirlos a los administradores de los regímenes del SIPA y no transfiera total o parcialmente los mismos, en los plazos establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias.

Artículo 60.- Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el responsable de la calificación de entidades financieras, bancarias o de títulos valores y depósitos a plazo fijo, que por inobservancia de los deberes a su cargo, función o empleo, efectuare una calificación incorrecta causando perjuicio al Fondo Previsional Social

Artículo 61.- Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el responsable de:

- a) Autorizar a la oferta pública o admitir su cotización en mercados de títulos valores que puedan ser objeto de inversión por parte del Fondo Previsional Social.
- b) Autorizar fondos comunes de inversiones que puedan ser objeto de inversión por parte del Fondo Previsional Social.
- c) Determinar los mercados que reúnan los requisitos enunciados en el artículo 42 de esta ley.
- d) Aprobar las calificaciones efectuadas por las sociedades calificadoras de riesgo a que se refiere el artículo 43 de esta ley.

- e) Autorizar cajas de valores y bancos para el depósito y custodia de inversiones de fondos de jubilaciones y pensiones que, por inobservancia de los deberes a su cargo, función o empleo, emanados de las leyes, decretos o normas reglamentarias a las que deba ajustar su actividad, efectuare una autorización, admisión, determinación o aprobación indebida, causando perjuicio del Fondo Previsional Social.

Artículo 62.- Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el responsable de efectuar las inversiones de un fondo de jubilaciones y pensiones, incluidos los fondos transitorios y de fluctuaciones, o de depositarlos o custodiarlos, que por inobservancia de los deberes a su cargo, función o empleo, emanados de las leyes, decretos o normas reglamentarias a las que deba ajustarse su actividad, llevare a cabo las inversiones, depósitos o custodia de un modo indebido, causando perjuicio a un fondo.

La misma pena se aplicará al responsable del control de las inversiones, depósitos o custodia, que por inobservancia de los deberes a su cargo, función o empleo, emanados de las leyes, decretos o normas reglamentarias a las que deba ajustar su actividad, efectuare el control indebidamente, causando perjuicio al fondo.

Artículo 63.- Será reprimido con prisión de 5 a 15 años quien, incurriendo en los ilícitos tipificados en este capítulo, causare un perjuicio al Fondo Previsional Social procurando un beneficio indebido para sí o para un tercero.

Capítulo III

Disposiciones Comunes a los capítulos anteriores

Aplicación del Código Penal y leyes penales específicas

Artículo 64.- Las disposiciones del presente título serán aplicables siempre que la conducta no estuviese prevista con una pena mayor en el Código Penal u otras leyes penales.

Personas de existencia ideal

Artículo 65.- Cuando el delito se hubiera cometido a través de una persona de existencia ideal, pública o privada, la pena de prisión se aplicará a los funcionarios públicos, directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes, que hubiesen intervenido en el hecho, o que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo hubiesen dado lugar a que el hecho se produjera.

Funcionarios públicos

Artículo 66.- Las escalas penales se incrementarán en un tercio del mínimo y del máximo para el funcionario público que participe de los delitos previstos en la presente ley cuando lo haga en el ejercicio de sus funciones.

Inhabilitación a funcionarios públicos, escribanos y contadores

Artículo 67.- Los funcionarios públicos, escribanos y contadores, que en violación de las normas de actuación de su cargo o profesión, a sabiendas informen, den fe, autoricen o certifiquen actos jurídicos, balances, cuadros contables o documentación, para la comisión de los delitos previstos en este título, serán sancionados con la pena que corresponda al delito en que han participado y con inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.

Sanciones. Modalidad del deber de denuncia

Artículo 68.- El procedimiento para la aplicación de una sanción a imponer por los organismos de control pertinentes, no estará supeditado a la previa denuncia penal, ni será suspendido por la tramitación de la correspondiente causa penal.

Cuando la autoridad de control pertinente, de oficio o a instancia de un particular, tomare conocimiento de la presunta comisión de un delito previsto por este título, lo comunicará de inmediato al juez competente, solicitando las medidas judiciales de urgencia, en caso que lo estimare necesario para garantizar el éxito de la investigación. En el plazo de treinta días elevará un informe adjuntando los

elementos probatorios que obraren en su poder y las conclusiones técnicas a las que hubiera arribado.

En los supuestos de denuncias formuladas directamente ante el juez, sin perjuicio de las medidas de urgencia, correrá vista por treinta días a la autoridad de control a los fines dispuestos en el párrafo anterior.

Caución real

Artículo 69.- En todos los casos de los delitos previstos en esta ley en que procediera la excarcelación o la eximición de prisión, éstas se concederán bajo caución real, la que cuando exista perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones, o a un afiliado, deberá guardar correlación y tener presente el monto en que, en principio, apareciere damnificado un fondo de jubilaciones o el afiliado con derecho a una prestación previsional.

Juez competente

Artículo 70.- Será competente la justicia federal para entender en los procesos por delitos tipificados en el presente título.

En la Capital Federal será competente la justicia nacional en lo penal económico.

Sanciones

Artículo 71.- La pena de prisión establecida por esta ley y las accesorias en su caso, serán impuestas sin perjuicio de las sanciones que están autorizados a aplicar los organismos de control.

Capítulo IV Otras Sanciones

Administración Nacional de la Seguridad Social

Artículo 72.- Sin perjuicio de las penas de prisión establecidas en este título la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará a los empleados infractores las multas establecidas en la Ley N° 17.250, según su Resolución N° 748/92 y con los procedimientos en ella establecidos.

Banco Central de la República Argentina

Artículo 73.- Sin perjuicio de las penas de prisión establecidas en este título el Banco Central de la República Argentina aplicará a las entidades financieras por él autorizadas, en caso de incumplimiento de sus obligaciones emanadas de esta ley y sus normas reglamentarias, las sanciones previstas en la Ley N° 21.526 con los procedimientos que ella establece.

Comisión Nacional de Valores

Artículo 74.- Sin perjuicio de las penas de prisión establecidas en este título la Comisión Nacional de Valores aplicará a las personas físicas o jurídicas que, en cualquier carácter, intervengan en la oferta pública de títulos valores en caso de incumplimiento de sus obligaciones emanadas de esta ley y sus normas reglamentarias, y de las específicas a las que deben adecuar su desenvolvimiento, las sanciones previstas en la Ley N° 17.811 con los procedimientos que ella establece.

Sustitúyese el inciso b) del artículo 10 de la Ley N° 17.811, por el siguiente:

b) Multa de mil (1.000) a cinco millones (5.000.000) de pesos, la que podrá elevarse hasta cinco veces el monto del beneficio obtenido o del perjuicio evitado como consecuencia del accionar ilícito si fuera mayor.

Superintendencia de Seguros de la Nación

Artículo 75.- Sin perjuicio de las penas de prisión establecidas en este título la Superintendencia de Seguros de la Nación aplicará a las compañías de seguros,

en caso de incumplimiento de sus obligaciones emanadas de esta ley y sus normas reglamentarias, las sanciones previstas en la Ley N° 20.091 con los procedimientos que ella establece.

Sustitúyese el primer párrafo de la segunda parte del artículo 31 (indisponibilidad de las inversiones) de la Ley N° 20.091, por el siguiente:

Hasta tanto sean cumplidas las medidas de regularización y saneamiento, la autoridad de control establecerá sobre las inversiones, las medidas previstas en el artículo 86 de esta ley.

Sustitúyese el inciso c) del artículo 58 de la Ley N° 20.091, por el siguiente:

Inciso c) Multa desde el 0,01 por ciento hasta el 0,1 por ciento del total de primas y recargos devengados.—neto de anulaciones en el ejercicio económico anterior, que no podrá ser inferior al 0,5 por ciento del capital mínimo requerido.

Sustitúyese el segundo y tercer párrafo del artículo 86 de la Ley N° 20.091 por el siguiente:

Cuando la resolución disponga la suspensión o la revocación de la autorización para operar en seguros, el tribunal de alzada dispondrá, a pedido de la Superintendencia de Seguros de la Nación la administración o intervención judicial del asegurador, que no recaerá en la autoridad de control.

La Superintendencia de Seguros de la Nación podrá disponer sin audiencia de parte, la prohibición a la entidad aseguradora de realizar, respecto de sus inversiones, cualquier acto de disposición o los de administración que específicamente indique y de celebrar nuevos contratos de seguros en los siguientes casos:

- a) Situación prevista en el artículo 31 de la Ley N° 20.091, según el texto modificado por la presente Ley;*
- b) Disminución de la capacidad económica o financiera, o manifiesta desproporción entre ésta y los riesgos retenidos o déficit en cobertura de los compromisos asumidos con los asegurados;*
- c) Infracción a las normas sobre egresos e ingresos de sobre depósito en custodia de títulos públicos de renta y títulos valores en general;*
- d) Falta de presentación por el asegurador de los estados contables de publicidad, de situación patrimonial, o de compromisos exigibles y siniestros liquidados a pagar en los plazos reglamentarios;*
- e) Irregularidades en la constitución o actuación de los órganos de administración y fiscalización o de las asambleas;*
- f) Irregularidades en la administración o contabilidad que impidan conocer la situación patrimonial de la entidad;*
- g) Dificultad de liquidez que haya determinado demora o incumplimiento de sus pagos.*

Para hacer efectivas estas medidas, la Superintendencia de Seguros de la Nación ordenará su toma de razón a las entidades públicas nacionales, provinciales o municipales o privadas que estime pertinentes.

Las medidas podrán levantarse para cumplir obligaciones con asegurados, para reinversión del bien de que se trate en cuyo caso, subsistirán sobre el que entre en su reemplazo o, cuando se compruebe que el asegurador se halla en condiciones normales de funcionamiento.

Los recursos administrativos o judiciales que se interpongan contra la resolución que disponga alguna de estas medidas serán al sólo efecto devolutivo.

Agrégase a continuación del primer párrafo del artículo 87 de la Ley N° 20.091 lo siguiente:

Aún cuando no estén firmes.

LIBRO II

Disposiciones Complementarias y Transitorias

Título I

Disposiciones complementarias

Aplicación supletoria

Artículo 76.- Las disposiciones de las Leyes Nros. 18.037 (t.o. 1976) y 18.038 (t.o. 1980) y sus complementarias, que no se opongan ni sean incompatibles con las de esta ley, continuarán aplicándose supletoriamente en los supuestos no previstos en la presente, de acuerdo con las normas que sobre el particular dictará la autoridad de aplicación.

Regímenes especiales

Artículo 77.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para que, en el término de un año a partir de la publicación de esta ley, proponga un listado de actividades que, por implicar riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro de su capacidad laboral, o por configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos particulares. Hasta que el Poder Ejecutivo Nacional haga uso de la facultad mencionada y el Congreso de la Nación haya dictado la ley respectiva, continúan vigentes las disposiciones de la Ley N° 24.175 y prorrogados los plazos allí establecidos. Asimismo continúan vigentes las normas contenidas en el Decreto N° 1021/74.

Los trabajadores comprendidos en dichos regímenes especiales tendrán derecho a percibir el beneficio ordinario cualquiera sea el régimen por el cual hayan optado, acreditando una edad y un número de años de aportes inferiores en ambos regímenes en no más de 10 años a los requeridos para acceder a la jubilación ordinaria por el régimen general.

Los empleadores estarán obligados a efectuar un depósito adicional en la cuenta de capitalización individual del afiliado de hasta un cinco por ciento (5%) del salario, a fin de permitir una mayor acumulación de fondos en menor tiempo. Este depósito será asimilable a un depósito convenido.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá contar con un informe, de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, con carácter previo, para cualquier aplicación de las facultades previstas en este artículo y en las leyes citadas. Dicho informe deberá proveer los elementos necesarios para el cálculo de los requisitos de edad, servicios prestados, aportes diferenciales y contribuciones patronales o subsidios requeridos para el adecuado financiamiento.

Título II

Disposiciones Transitorias. Vigencia

Artículo 78.- Modifícase la Ley N° 18.037 (t.o. 1976), en la forma que a continuación se indica:

1. Agrégase al artículo 13 el siguiente párrafo:

Establécese un monto máximo de la remuneración sujeta a aportes y contribuciones, el que será definido oportunamente.

2. Fíjense las edades previstas en el inciso a) del artículo 28 en sesenta y dos (62) años para los varones y cincuenta y siete (57) para las mujeres.

3. Fíjase en veintidós (22) años el mínimo de servicios con aportes establecidos en el artículo 28 inciso b).

4. Fíjase en sesenta y siete (67) años la edad prevista en el inciso a) del artículo 31.

5. Sustitúyese los incisos 1, 2 y 3 del artículo 49 por los siguientes:

1. Si todos los servicios computados fueren en relación de dependencia, se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante el período de diez (10) años inmediatamente anteriores a la cesación en el servicio.

A fin de practicar la actualización prevista en el párrafo anterior, la ANSES reglamentará la aplicación del índice salarial a utilizar.

Este índice deberá ser de carácter oficial, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En caso de jubilación por invalidez, si el afiliado no acredita un mínimo de diez (10) años de servicios, se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante todo el tiempo computado.

2. Al promedio obtenido de acuerdo con el inciso anterior se aplicará uno de los siguientes porcentajes:

a) Setenta por ciento (70%), si al momento de cesar en la actividad el afiliado no excediera de la edad mínima requerida por la presente ley para obtener jubilación ordinaria;

b) Setenta y ocho por ciento (78%), si a ese momento el afiliado no excediera de un (1) año dicha edad;

c) Ochenta por ciento (80%), si a ese momento el afiliado no excediera de dos (2) años dicha edad;

d) Ochenta y dos por ciento (82%), si a ese momento el afiliado no excediera de tres (3) años dicha edad. Los incrementos de porcentajes previstos precedentemente no serán aplicables en el caso de reajuste del haber o transformación de la prestación del jubilado que continuare en la actividad o volviere a la misma.

3. Si se computaren sucesiva o simultáneamente servicios en relación de dependencia y autónomos, el haber se establecerá sumando el que resulte para los servicios en relación de dependencia y el correspondiente a los servicios autónomos, ambos en proporción al tiempo computado para cada clase de servicios, con relación al mínimo requerido para obtener jubilación ordinaria.

Modificación de la Ley Nº 18.038 (t.o. 1980)

Artículo 79.— Modifícase la Ley Nº 18.038 (t.o 1980), en la forma que a continuación se indica:

a) Fíjase en veintidós (22) años el mínimo de servicios con aportes establecido en el artículo 16, inciso b).

b) En el artículo 37 sustitúyese la expresión "setenta por ciento (70%)" por "sesenta por ciento (60%)".

Movilidad de las prestaciones

Principio de ley aplicable

Artículo 80.- El derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial, salvo disposición expresa en contrario: a) para las jubilaciones, por la ley vigente a la fecha de cese en la actividad o a la de solicitud, lo que ocurra primero, siempre que a esa fecha el petionario fuera acreedor a la prestación, y b) para las pensiones, por la ley vigente a la fecha de la muerte del causante.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, si a lo largo de la vida laboral, el solicitante cumpliera los extremos necesarios para la obtención del beneficio por un régimen diferente, podrá solicitar el amparo de dicha norma, en los términos del primer párrafo del artículo 82 de la Ley N° 18.037.

Vigencia de las Leyes Nros. 21.074 y 24.013

Artículo 81.- Esta ley no importa modificación de las disposiciones de las Leyes Nros. 21.074 y 24.013.

Derogación de la Ley N° 23.604

Artículo 82.- Derógase la Ley N° 23.604. Lo dispuesto precedentemente no es aplicable en los casos en que a la fecha de entrada en vigor de la Ley N° 24.241, el interesado hubiera ejercido en forma expresa ante el organismo previsional competente, el derecho acordado por la ley citada.

Aplicación de los bonos de consolidación de deudas previsionales

Artículo 83.- Los tenedores de bonos de consolidación de deudas previsionales, incluyendo los a emitirse en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, podrán cancelar a la par las obligaciones vencidas al 30 de junio de 1992 en concepto de cargas sociales, aportes o contribuciones que se calculen sobre la nómina salarial que se hallaren a cargo del tenedor y que se adeuden al Sistema Único de Seguridad Social o a las obras sociales del sector público.

Ratificación del Decreto N° 2741/91

Artículo 84.- Ratifícase el Decreto N° 2741, del 26 de diciembre de 1991.

Derogación de las Leyes Nros. 18.037 y 18.038, sus complementarias y modificatorias

Artículo 85.- Deróganse las Leyes Nros. 18.037 y 18.038, sus complementarias y modificatorias, con excepción del artículo 82 y los artículos 80 y 81 que se sustituyen por el siguiente texto:

(Artículos 80 y 81, Ley N° 18.037): Las cajas reconocedoras de servicios deberán transferir a la caja del organismo otorgante de la prestación, los aportes previsionales, contribuciones patronales, y las sustitutivas de estas últimas si las hubiera. Deben considerarse incluidos en la transferencia que se establece por la presente, los cargos que adeude el beneficiario, correspondientes a los servicios reconocidos, a efectos de su amortización ante la caja otorgante. La transferencia deberá efectuarse en moneda de curso legal en forma mensual y de acuerdo al procedimiento que se determine en la reglamentación. Será organismo otorgante de la prestación cualquiera de los comprendidos en el sistema de reciprocidad, en cuyo régimen se acredite haber prestado mayor cantidad de años de servicio con aporte. En el caso de que existiese igual cantidad de años de servicio con aportes el afiliado podrá optar por el organismo otorgante. Queda derogada la Ley N° 18.038, sus complementarias y modificatorias, todo con la salvedad de lo que disponen los artículos 129,156 y 160 de la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

LIBRO III

Consejo Nacional de Previsión Social

Creación y misión

Artículo 86.- Créase el Consejo Nacional de Previsión Social, el que tendrá por misión asegurar la participación de los trabajadores, empresarios y beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en el desarrollo, supervisión y perfeccionamiento de dicho sistema.

Deberes

Artículo 87.- Son deberes del Consejo Nacional de Previsión Social:

- a) Evaluar el cumplimiento de los objetivos de la fiscalización y regulación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones;
- b) Evaluar el desarrollo del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
- c) Considerar las iniciativas y proyectos que le sometan los sectores que representa;
- d) Proponer a las autoridades competentes normas tendientes a corregir desvíos del sistema y mejorar su funcionamiento;
- e) Todo otro cometido vinculado al cumplimiento de su misión.

Atribuciones y facultades

Artículo 88.- Para el cumplimiento de sus deberes, el Consejo Nacional de Previsión Social tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

- a) Requerir de los organismos de control del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones toda información que considere conveniente para el cumplimiento de su misión;
- b) Denunciar ante las autoridades competentes todo incumplimiento de los deberes a su cargo por parte de los funcionarios y organismos de control del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
- c) Efectuar por sí o por intermedio de terceros, con sujeción a las normas de contratación vigentes para el sector público, los estudios técnicos tendientes a determinar la evolución del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
- d) Toda otra vinculada o que resulte necesaria para el cumplimiento de su misión y deberes.

Integración

Artículo 89.— El Consejo Nacional de Previsión Social estará integrado por tres (3) representantes de los trabajadores, tres (3) representantes de los empleadores y tres (3) representantes de los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con los procedimientos que la reglamentación determine.

El Consejo será presidido por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, actuando como vicepresidente el secretario de Seguridad Social.

Gastos de funcionamiento

Artículo 90.— La Administración Nacional de la Seguridad Social pondrá a disposición del Consejo el personal que éste requiera para el cumplimiento de los cometidos asignados en el presente libro.

Los demás gastos que irroque la constitución y funcionamiento del Consejo serán imputados a "Rentas generales".

LIBRO IV

Compañías de Seguros

Capítulo I

Seguro de Retiro

Seguro de retiro

Artículo 91.— Se denomina seguro de retiro a toda cobertura sobre la vida que establezca, para el caso de supervivencia de las personas a partir de la fecha de retiro, el pago periódico de una renta vitalicia; y para el caso de muerte del asegurado anterior a dicha fecha, el pago total del fondo de las primas a los beneficiarios indicados en la póliza o a sus derecho habientes.

Entidades autorizadas

Artículo 92.— El seguro del artículo anterior sólo podrá ser celebrado por las entidades aseguradoras que limiten en forma exclusiva su objeto a esta cobertura y a las prestaciones de pago periódico previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Tales entidades podrán operar en otros seguros de personas, que resulten complementarios de las coberturas de seguros de retiro, deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y su razón social deberá contener la expresión "seguros de retiro".

Empresas en funcionamiento

Artículo 93.— Las entidades ya autorizadas para operar en el seguro de retiro a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme la Resolución General Nº 19.106 de la Superintendencia de Seguros de la Nación conservarán la autorización conferida con los alcances con que les fue otorgada, que se considerará extendida a las modalidades contempladas en el presente capítulo y normas reglamentarias.

Capítulo II

Disposiciones Comunes

Incumplimientos y sanciones

Artículo 94.— Ante el incumplimiento de cualquiera de las exigencias a las que se encuentran sometidas las empresas de seguros a las que se refiere el presente libro, la Superintendencia de Seguros de la Nación podrá ordenar a la entidad de que se trate que se abstenga de celebrar nuevos contratos y emplazarla para que en el término de treinta (30) días regularice su situación.

De subsistir la observación al cabo de ese tiempo, la Superintendencia de Seguros de la Nación ordenará a la entidad que licite públicamente dentro del plazo improrrogable de quince (15) días la cesión total de la cartera.

La Superintendencia de Seguros de la Nación fiscalizará el proceso de cesión y la adjudicación no podrá exceder de treinta (30) días a partir del llamado a licitación.

Si la entidad no acatara la orden de cesión o si ésta fuera infructuosa, la Superintendencia de Seguros de la Nación ordenará que se abone a los asegurados con derecho a percepción de rentas el ciento por ciento (100%) de la reserva matemática y a los que no se encuentren en tal situación, como mínimo, el ciento por ciento (100%) del valor de rescate, todo ello dentro del plazo y en las condiciones que fije. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la liquidación forzosa de la entidad aseguradora. En tal caso, dichos asegurados serán acreedores con privilegio especial sobre el producido de los bienes que

integren las reservas y con la prelación resultante del orden anteriormente enunciado.

Inembargabilidad

Artículo 95.— Los bienes de las entidades de seguro de vida y de retiro serán inembargables en la medida de los compromisos de cualquier índole que tengan con sus asegurados. Esta norma no será de aplicación en caso de tratarse de embargo dispuestos en favor de asegurados en ejercicio de sus derechos derivados del contrato de seguro, y en los dispuestos por la Superintendencia de Seguros de la Nación en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 20.091.

Aprobación de planes

Artículo 96.— La Superintendencia de Seguros de la Nación establecerá un sistema de aprobación automática de los planes de los seguros previstos en el presente libro a cuyos efectos definirá previamente las pautas mínimas que deberán satisfacer las bases técnicas y demás elementos técnicos.—contractuales de los planes presentados así como también las restantes condiciones que debe satisfacer el asegurador para acogerse al sistema de referencia.

Tratamiento impositivo

Artículo 97.— Las entidades de seguros de retiro y de seguros de vida estarán sujetas al mismo tratamiento impositivo de las administradoras en las operaciones que tengan relación con la administración de inversiones correspondientes a obligaciones con sus asegurados, a sus cobranzas de primas y al pago de beneficios.

En el cálculo de la base imponible del impuesto previsto en la Ley N° 23.760 en su título I, no serán computados aquellos activos que respondan a la inversión de los compromisos técnicos con los asegurados.

Los valores de rescate que perciba el asegurado no estarán sujetos al impuesto a las ganancias en la medida que se apliquen a la contratación de otro seguro de retiro.

LIBRO V
Prestaciones No Contributivas

Edades para la obtención de prestaciones no contributivas

Artículo 98.— Fíjanse las siguientes edades para la obtención de las prestaciones no contributivas previstas en las normas legales que a continuación se indican, con la salvedad de lo que dispone el artículo siguiente:

| LEY | EDAD |
|--|---------|
| 13.337, artículo 2, inciso a) | 70 años |
| 13.478, artículo 9, modif. por Ley N° 20.267 | 70 años |
| 22.430, artículo 1 | 70 años |
| 23.891, artículo 4º | 60 años |
| 24.018, artículo 3º | 65 años |

Escalas de edades

Artículo 99.— Las edades establecidas en el artículo anterior se aplicarán de acuerdo con la siguiente escala:

| | Edades que se incrementan de | | |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Desde el año | | | |
| | 60 a 70 años | 60 a 65 años | 50 a 60 años |
| 1993 | 67 | 62 | 52 |
| 1994 | 68 | 63 | 54 |
| 1997 | 69 | 64 | 57 |
| 2001 | 70 | 65 | 60 |

Leyes Nros. 16.516 y 20.733: Requisito de edad

Artículo 100.— Para tener derecho a la prestación no contributiva establecida por las Leyes Nros 16.516 y 20.733, es condición haber cumplido la edad de sesenta (60) años.

Sólo se podrá obtener una prestación fundada en las leyes citadas, aunque el titular hubiera sido acreedor a más de un premio de los previstos por dichas leyes.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes es aplicable a las personas que obtuvieren uno de los premios aludidos en las leyes mencionadas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente.

Extensión a derechohabientes

Artículo 101.— En los supuestos en que las leyes de prestaciones no contributivas prevean que en caso de fallecimiento del titular, el derecho acordado se extenderá a los derechohabientes que enumeren el haber de la prestación de éstos se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.

Financiamiento de prestaciones no contributivas.

Artículo 102.- A partir de la promulgación de la presente ley, el pago de las prestaciones no contributivas, acordadas o a acordar, se atenderá con fondos de "Rentas Generales".

LIBRO VI
Capítulo I
Normas sobre el Financiamiento

Artículo 103.- La Administración Nacional de la Seguridad Social gozará de autonomía financiera y económica del Presupuesto Nacional.

Artículo 104.- En la medida en que aumente la recaudación de los recursos de la seguridad social el Poder Ejecutivo queda facultado para disminuir proporcionalmente la incidencia tributaria sobre el costo laboral, preservando un adecuado funcionamiento del sistema previsional.

Las contribuciones patronales destinadas al financiamiento de la Seguridad Social, podrán ser disminuidas por el Poder Ejecutivo nacional únicamente en la medida que fueran efectivamente compensadas con incrementos en la recaudación del sistema, o con aportes del Tesoros que equiparen dicha reducción.

NOTA AL ARTICULO 104: “Asimismo, esto me lleva al segundo comentario: no será sustentable el sistema previsional en el largo plazo si no se efectúa —obviamente, entiendo que excede el marco de lo que aquí se está debatiendo, pero siento la necesidad de plantearlo— una verdadera reforma impositiva,

que centre el grueso de la recaudación en impuestos a las grandes ganancias y a los grandes patrimonios como sucede en la mayoría de los países desarrollados y además en muchos otros países en desarrollo.

En la actualidad, todos los países están con un gran desafío a futuro que ya está impactando y es el aumento de la esperanza de vida de la población. Este tema genera tensiones en la financiación de los sistemas previsionales. Los preopinantes también han hablado de la cuestión, porque es una saludable realidad que nos crea un problema necesario de abordar. Por ese motivo, hay que generar los recursos suficientes con un sistema impositivo que no sea regresivo como el actual, para que la mayor presión impositiva sea soportada por la economía, a través de la mayor progresividad de ese sistema. Por ejemplo, en este sentido, el debate fundamental que por estos días se está dando en los Estados Unidos es cómo se han desmejorado las finanzas por las rebajas efectuadas por la actual administración de los impuestos a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas personales. Este hecho ha producido un fuerte aumento de la concentración del ingreso y, en estos días, han aparecido publicaciones que muestran cómo se ha estratificado negativamente también la distribución del ingreso allí y donde los mil millonarios han aumentado notablemente su participación en la renta, mientras que ha crecido de la misma manera, en la otra punta, la cantidad de pobres y la participación que el 10 por ciento más pobre tiene en la distribución de ese ingreso.” Exposición del Dr. CARLOS HÉLLER, versión taquigráfica, Plenario de Comisiones, 12/11/2008

Artículo 105.- Anualmente, de manera conjunta con la remisión al Honorable Congreso de la Nación del presupuesto general de la administración nacional, el Poder Ejecutivo enviará un informe detallado de la situación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Dicho informe deberá incluir el estado financiero del régimen previsional público, desagregado en las diversas prestaciones que lo componen, así como la situación del régimen de capitalización y de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Asimismo, en el caso del régimen público deberán incluirse las proyecciones financieras de por lo menos cinco ejercicios presupuestarios.

Artículo 106.- A los efectos de la interpretación de la presente ley, debe estarse a lo siguiente:

- a) Las normas que no fueran expresamente derogadas mantienen su plena vigencia;
- b) Cumplida la condición establecida en el artículo 54 de la presente ley, las referencias que la legislación vigente haga a las Leyes Nros. 18.037 y 18.038, en cuanto al concepto de remuneración a aportes o contribuciones vinculadas a dicho concepto, debe entenderse como hechas, en lo pertinente, a lo prescripto en los artículos 6º y 11 de la presente;
- c) Las referencias que la legislación vigente haga al concepto haberes de las prestaciones previsionales, deben entenderse como hechas a la sumatoria total de los haberes que el beneficiario perciba tanto del régimen de reparto cuanto del régimen de capitalización;
- d) Con la salvedad de lo prescripto en el artículo 54, esta ley entrará en vigencia al momento de su promulgación, con excepción de los artículos 78, 79 y 82, que entrarán a regir a los sesenta días de la promulgación.

Artículo 107.- Modifícase la Ley de Concurso (Ley Nº 19.551), t.o. 1984, en la siguiente forma:

1. Sustitúyese el primer párrafo del inciso 8, del artículo 11, por el siguiente:

Acompañar la documentación que acredita el pago de las remuneraciones y el cumplimiento de las disposiciones sobre recursos y la seguridad social del personal en relación de dependencia, actualizado al momento de la prestación.

2. Incorpórase como segundo párrafo del inciso 8 del artículo 11 el siguiente:

El cumplimiento de las disposiciones sobre recursos de la seguridad social deberá ajustarse a las modalidades y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo en la pertinente reglamentación.

Artículo 108.- Los trabajadores que hubiesen prestado servicio bajo dependencia de un empleador acogido a las disposiciones del artículo 12 y concordantes de la

Ley N° 24.013 podrán acreditar los años trabajados con los mismos en los términos del inciso c) del artículo 19 de la presente Ley.

Capítulo II Fondo Previsional Social

Artículo 109.- Créase el Fondo Previsional Social que estará integrado por:

- a) Los recursos propios percibidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que al cierre de cada ejercicio anual resulten de libre disponibilidad una vez deducida la deuda exigible del organismo y que se hallen registrados como disponibilidades o como activos financieros.
- b) Los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS).
- c) Los bienes recibidos por la ANSES como consecuencia de la transferencia de los saldos de las cuentas de capitalización en cumplimiento del artículo 3° del Decreto N° 313/07, reglamentario de la Ley N° 26.222.
- d) Los bienes pertenecientes a la transferencia de las cuentas de los afiliados al régimen de capitalización individual transferidos por esta ley.
- e) Las rentas provenientes de las inversiones que realice.
- f) Cualquier otro aporte que establezca el ESTADO NACIONAL mediante su previsión en la Ley de Presupuesto correspondiente al período que se trate.

El Fondo Previsional Social tendrá carácter fiduciario.

Artículo 110.- La administración del Fondo Previsional Social estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el agente fiduciario será el Banco De La Nación Argentina.

NOTA AL ARTICULO 110: “Hicimos un trabajo, que no fue fácil, de recopilación estadística y armamos las cuentas del sistema de pensiones desde que fue fundado en 1945 el viejo sistema unificado. Aquí tienen los recursos y las columnas representan los gastos. Desde 1944 hasta 1964 el sistema generó un excedente muy importante. El sistema entró en equilibrio por la década del 60 y a partir de los años 70 y hasta hoy está generando un déficit, en verdad, casi tan importante que el superávit inicial. Es decir, superávit y déficit entendido como gasto previsional versus impuesto a la nómina salarial, que son verdaderamente los ingresos contributivos.

Con este excedente no sucedió lo que dice mi abuela, que se lo robó alguien, simplemente fue lo que financió al Estado benefactor de las décadas del 40, 50 y 60. Es decir, escuelas, hospitales y rutas fueron contruidos con este excedente. Fue un mecanismo implícito; la plata fue colocada en bonos del Tesoro a 4 por ciento de interés anual nominal y con una tasa de inflación del 12, 13 ó 20 por ciento. Eso, vía cuasi impuesto inflacionario, paso al Estado. Muchas de las cosas que tenemos hoy en nuestro Estado fueron financiados por excedentes previsionales. De la misma manera, el déficit ya va siendo más grande que el superávit inicial, con lo cual hay una situación de empate.

A partir de ahora puede aparecer eventualmente un excedente pero la diferencia es que no es un excedente previsional, sino que es un excedente generado por impuestos de rentas generales. Me parece que no podemos asumir que ese excedente es, sin duda, patrimonio de los jubilados. Considero que hay un debate en donde tenemos que definir qué sistema de jubilación queremos y cómo se financia. No podemos decir: “Tenemos este financiamiento y con esto pagamos aquello.” No, hay que definir qué jubilación queremos, cómo se financia y discutir, si sobra, si con ese dinero vamos a reintegrarlo a las provincias, que son quienes cedieron este excedente mediante el 15 por ciento de la coparticipación, el 20 del Impuesto a las Ganancias y 11 por ciento del IVA, etcétera. ¿O qué hacemos?

En realidad, no tenemos ni tuvimos en los últimos 20 años una discusión acerca de qué parte del esfuerzo de los contribuyentes se utiliza en la formación de capital humano para el futuro o se utiliza para resarcir los derechos adquiridos de la clase pasiva. Y hasta que no discutamos qué tipo de beneficio queremos darle a la clase pasiva, difícilmente podamos discutir esto razonablemente. Vinculado a esto hay una cuestión de intangibilidad o no de los fondos. En ese sentido, considero que la intangibilidad tiene que ver cuando estamos hablando de un impuesto sobre la nómina salarial. Tal vez tenga una cabeza demasiado fiscalista, pero la intangibilidad del IVA no me suena mucho. Considero que es un tema que hay que discutirlo con mucho cuidado.” De la intervención del Dr. OSCAR CETRANGOLO, versión taquigráfica, Plenario de Comisiones, 12/11/2008

Artículo 111.- El Fondo Previsional Social tendrá por finalidad:

- a) Atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales.
- b) Constituirse como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional público garantizando el carácter previsional de los mismos.
- c) Contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del Fondo.

- d) Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales

NOTA AL ARTICULO 112: “La otra cuestión que a mí me genera muchas preguntas es cómo administrará la ANSeS estos recursos. Oigo mucho hablar de la ANSeS —después volveré al tema— como si pudiera ser un gran banco de desarrollo, una institución rica, una especie de fondo monetario local que tendrá capacidad infinita. La ANSeS estará perdiendo dinero dentro de tres años. Hoy ingresan más jubilados al sistema que aportantes netos. Los cálculos actuariales son categóricos: algunos en tres años, otros en siete, pero en todos se cruzan las curvas. La ANSeS no ha tenido quebranto el año pasado, exclusivamente, porque tuvo aportes excepcionales por los traspasos.

Cuando uno toma en cuenta que se sancionó una ley de movilidad jubilatoria, ya empieza a haber cierto ruido con los nombres. Llamamos “de reparto” al sistema que estamos defendiendo —todos sabemos que tiene otra cantidad de ingresos especiales—, porque se repartía lo que se recuperaba. Por otro lado, estamos diciendo que las jubilaciones tienen una lógica independiente, que me parece muy bien. Entonces, los economistas diríamos que está sobredeterminado: hay demasiadas reglas sobre la misma plata; no se puede cumplir. Hay menores ingresos por reducción de aportes o por el trabajo en negro que ha aumentado —está cerca del 40 por ciento— y el desempleo. Hay mayores egresos también que se pagan por las moratorias recientes y una asunción de una deuda de la cual nadie habla: la deuda —valor nominal; no el presente sino sumando los vencimientos— podemos discutir si está entre 450.000 millones de dólares o 550.000 millones de dólares la que asume la ANSeS para pagar futuras jubilaciones.

Es importante un fondo, pero la deuda que tiene y el compromiso a pagar es diez veces más. Entonces, ¿con qué criterio se manejarán esos fondos? Este es un tema interesante, porque uno piensa que el ANSeS es lógico y tendrá que tener una rentabilidad positiva, es decir, por encima de la inflación de estos recursos. Pero, ¿cómo se hace para tener una rentabilidad por encima de inflación si estás tapado de títulos públicos? Es como sacar plata del bolsillo derecho para ponerla en el izquierdo. El Estado no puede estar pagando tasas de interés positivas, como lo hacía entre 1995 y 2000. En 2001 tuve un debate por ese tema. Las AFJP —seguramente Carlos Heller lo recuerda— al 2001 tenían un rendimiento promedio del 11 por ciento en pesos o dólares. Me acuerdo que al ministro Cavallo le envié una nota diciéndole que, si seguían con ese rendimiento y uno se jubilaba a los 35 años, quien ganaba mil se iba a jubilar con dos mil de jubilación. Claro, del otro lado había un Estado quebrado que era quien le pagaba ese 11 por ciento.

Esta incompatibilidad entre un organismo que tiene que administrar con rentabilidad para poder hacer frente al crecimiento de sus obligaciones se resuelve con obras que tengan rentabilidad. Estas obras o son privadas o públicas con concesión. Cuando uno habla en el mercado de capitales de los aportes previsionales, el ejemplo clásico son los caminos con peaje. O sea, son obras que hace el Estado pero que lo pagan los usuarios. La red de autopistas americanas se hace de esta manera en las décadas del ‘50 y ‘60.

Tenemos que tener claro que el tema es bien complejo y salir a conseguir una rentabilidad de estos fondos, pero no pagada por títulos públicos. No es financiamiento de los déficit fiscales. Si pagan las tasas, es más déficit a futuro; si es que el Estado consigue tasas negativas para financiar sus necesidades, la ANSeS, quiebra. Entonces, acá estamos poniendo una inconsistencia adentro del sistema. Dentro de pocos meses o años estaremos hablando cómo refinanciamos a la ANSeS, y tenemos que evitar eso. Por eso, creo que la discusión es bastante más compleja que la que se puede dar en un par de semanas.”

Exposición del Dr. JAVIER GONZALEZ FRAGA, Versión Taquigráfica, Plenario de Comisiones, 12/11/2008

Artículo 112.- Transfíranse en especie a la Administración Nacional de la Seguridad Social los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados al Régimen de Capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en esta Ley, con las limitaciones que surjan de lo dispuesto por el artículo 22 de la presente. Dichos activos pasarán a integrar el Fondo Previsional Social.

Normas sobre transición de regimenes

Artículo 113.- Elimínase el régimen de capitalización individual previsto en el Título III de la ley N° 24.241 y sus modificatorias.

Artículo 114.- Transfíranse la totalidad de los afiliados del régimen de capitalización al régimen general instituido en el artículo 1° de la presente.

Artículo 115.- Los afiliados transferidos tendrán los mismos derechos y obligaciones que los afiliados que están en el régimen público de reparto. Los aportes efectivizados al régimen de capitalización serán considerados como realizados al régimen público de reparto.

Artículo 116.- Los beneficios de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento que, a la fecha están siendo liquidados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones bajo las modalidades de retiro programado o retiro fraccionario serán pagadas por el régimen previsional público a partir de la vigencia de la presente ley. El importe de dichas prestaciones será valorizado al valor cuota más alto obtenido durante el año 2008. Estas prestaciones en lo sucesivo tendrán la movilidad prevista en el artículo 27 de la presente.

Artículo 117.- Los beneficios de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento que, a la fecha están siendo liquidados por la modalidad renta vitalicia previsional continuaran abonándose a través de la correspondiente Compañía de Seguros de Retiro.

Artículo 118.- Los afiliados al régimen de capitalización que hubieran ingresado importes en sus cuentas de capitalización individual bajo la figura de imposiciones voluntarias y/o depósitos convenidos y que aún no

hubiesen obtenido un beneficio previsional podrán solicitar, a partir de la vigencia de la presente ley, su devolución.

Artículo 119.- La Administración Nacional de la Seguridad Social se subroga en las obligaciones y derechos que la Ley N° 24241 y sus modificatorias le hubiera asignado a las Administradoras de Fondos de Pensión.

Artículo 120.- Autorízase por única vez, a los afiliados del régimen de capitalización y por el término de 90 días, a contratar un seguro de retiro en una compañía de seguros o en Nación AFJP Residual, para ser utilizado a partir de los 60 años las mujeres y 65 años los hombres, con los fondos acumulados en su cuenta individual.

Dicha opción significará resignar los años de aportes realizados al sistema de capitalización, que no podrán ser utilizados para contabilizar los años de servicios con aportes necesarios para acceder a las prestaciones previstas en los incisos b), c) y d) del artículo 17 de la presente.

La compañía de seguro o Nación AFJP Residual deberá informar por escrito cual sería la renta presente a cobrar con los fondos acumulados a la fecha.

Artículo 121.- Además de la opción establecida en el artículo precedente, el trabajador que hubiera aportado al Régimen de Capitalización podrá optar al momento de determinación del haber jubilatorio inicial por el haber determinado por el sistema de reparto en los términos de la presente ley o el haber que surja por aplicación de la Ley N° 24.241 vigente al período de aportes a capitalización computando el mejor rendimiento promedio en dicho período, el que fuere mayor.

Artículo 122.- En caso de no existir derechohabientes, según la enumeración efectuada en la presente, se abonará el saldo de la cuenta de capitalización individual a los herederos del causante declarados judicialmente. Para ello, el fallecimiento del afiliado debió haberse producido con anterioridad a la promulgación de la presente.

Artículo 123.- Dentro de los 180 días se propondrá la creación de un Ente con personería Pública no Estatal, que sustituirá al Banco de la Nación Argentina - AFJP Residual en la administración del Fondo Previsional Social.

Artículo 124.- Las inversiones establecidas en los artículos precedentes podrán realizarse en los términos dispuestos con los Fondos Excedentes del Sistema.

Artículo 125.- Facultase al Poder Ejecutivo nacional a absorber la totalidad del personal dependiente de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, el que continuará prestando sus servicios en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en la Auditoría General de la Nación (AGN) y en el Banco De la Nación Argentina (BNA), reconociéndoles su antigüedad, categoría y demás derechos laborales adquiridos.

NOTA AL ARTICULO 125:

“Sra. Negre de Alonso. — Me preocupan dos cuestiones. Con respecto a la transferencia de los contratos de trabajo, el artículo 11 del proyecto que envió el Poder Ejecutivo establecía “tendientes a preservar”. Actualmente, fue modificado y el actual artículo 14 del proyecto que viene de la Cámara de Diputados, en lugar de decir “tendientes a preservar” dice “para garantizar”. No se establece la transferencia concreta de los contratos de trabajo. En realidad, para haber garantizado se tendría que haber dicho transfiriese a la órbita del Poder Ejecutivo o a la órbita que el Poder Ejecutivo a través de la reglamentación establezca o a un sistema de opción ya que el licenciado Boudou creo que dijo que iban a optar a qué lugar podían ir. En efecto, me parece que si bien con el artículo 14 se ha mejorado este aspecto, no ha quedado claro que hay una transferencia sí o sí de los trabajadores de las AFJP al Estado nacional. Además, tengo otra duda con respecto al artículo 15 porque dicho artículo, tal como está hoy, siempre tuvo una diferencia —como sucedió con el artículo que venía del Poder Ejecutivo— con respecto al personal médico, auxiliares, enfermeros etcétera, que se transfieren a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ahora, se establece que “se transferirán en la proporción y oportunidad que sea necesario”. Eso es textual. “Proporción y oportunidad”. Proporción significa porcentaje —no todos van a pasar— y oportunidad significa tiempo, ¿cuándo? Eso no se establece en el proyecto.

Por otro lado, en cuanto a lo que comentaba el senador Sanz, para que quede aclarado, el segundo párrafo del artículo 15, por una cuestión de técnica legislativa, dice que “a los efectos relativos a la antigüedad en el empleo del personal que sea transferido se considerará como tiempo de servicio el que efectivamente trabajó en el organismo cedente”. Eso está en el marco del artículo 15. El artículo 15 se refiere a un tratamiento especial de todo lo que es servicio médico, servicio como un término amplio, desde el personal administrativo que trabaja allí hasta los enfermeros, los auxiliares, los médicos, etcétera. Entonces, a los efectos de que quede debidamente aclarado, pregunto ¿el segundo párrafo del artículo 15 se refiere exclusivamente al tratamiento del artículo 15 o se refiere a todo el personal y es simplemente un defecto de técnica legislativa?

Sr. Tomada. — Sin perjuicio de que después el funcionario a cargo de la Superintendencia de AFJP haga algunas precisiones mayores, me gustaría aclarar las dudas tanto del artículo 14 como con respecto al artículo

15. Primero, es necesario señalar que esta decisión de implementar una política de preservación de los puestos de trabajo es un avance en un proceso que jamás tuvo en cuenta la importancia de asegurarle a los trabajadores del sector privado que estaban afectados a una determinada empresa y su futuro laboral. Este es un hecho, diría, casi inédito. Por eso, la palabra transferencia es difícil de implementar acá y creo que está salvada claramente por la última frase del artículo 14 que establece la vigencia plena del artículo 230 de la Ley de Contrato de Trabajo, que excluye el sistema de transferencia común del sector privado ante la compra y transferencia de una empresa o establecimiento. Este es un caso absolutamente distinto que se fija por reglas y que debo decirle ha sido perfeccionado en la Cámara de Diputados, otorgándole en cada una de esas modificaciones una mayor garantía y seguridad a los trabajadores. ¿Cómo es el sistema que diseña el artículo 14? Establece que, dentro del principio general de garantizar el empleo de los trabajadores no jerárquicos de las empresas, primero tiene que haber una decisión de la empresa con relación a la preservación del empleo de ese trabajador dentro de la empresa o dentro del grupo empresario al que pertenece. En caso de que así no sea —la decisión de un despido directo con la debida indemnización—, el Estado asume el compromiso de reubicar en el sector público preferentemente —eventualmente en el sector privado, pero digamos en principio en el sector público— a todos y a cada uno de estos trabajadores, garantizándoles —y acá avanza otro paso más— y reconociéndoles la antigüedad a los efectos de la licencia o a los efectos de las cláusulas de beneficios convencionales que se apliquen en ese organismo al cual el trabajador será destinado; destinado en términos de que su voluntad sea ingresar a esta oferta que el Estado le hará.

10/11/08 Plenario de comisiones Pág. 21

Con lo cual, el esquema del principio de garantía, el despido con indemnización, la reubicación en un organismo del Estado y la seguridad del respeto de su antigüedad para los beneficios de licencias y convencionales conforman un estatuto protectorio como pocas veces ha habido en caso de la modificación de la situación de relación de dependencia de un sector privado a público. **Sra. Negre de Alonso.** — Entonces, cuando estamos incorporando la palabra “para garantizar” implica que garantizar puede ser garantizar al sector público o al sector privado. **Sr. Tomada.** — En principio, donde nosotros tenemos mayor posibilidad... **Sra. Negre de Alonso.** — Como usted dijo al sector público o al sector privado, quería que me lo dejara en claro. **Sr. Tomada.** — En principio, al sector público, pero eventualmente podría ser el sector privado. **Sra. Negre de Alonso.** — Perfecto. O sea que no necesariamente todos los empleados de las AFJP pueden pasar al sector público, sino que también pueden ser reubicados en el sector privado. **Sr. Tomada.** — En la medida que haya de parte del sector privado oferta. Por ejemplo, ustedes saben que en la Argentina existe la Red de Oficinas de Empleo Público en todo el país, que hace una suerte de intermediación entre quienes buscan empleo y quienes demandan alguna determinada competencia o calificación. En este caso, para decirlo de alguna manera, nosotros asumimos ese rol de intermediación tratando de hacer las reubicaciones, garantizándole a todos los trabajadores dependientes una reubicación en el sector público. De la misma manera que hacemos esta intermediación, también podríamos intentarlo sobre el sector privado, pero como el Estado asume plenamente una garantía —o sea, ya no es solamente vamos a preservar el empleo sino la garantía— es en principio sobre el sector público. Por supuesto que si podemos conseguir en el sector privado reubicaciones mejor aún. No nos olvidemos de que las administradoras de fondos de pensión, en la mayoría de los casos, forman parte de un grupo económico que también debe asumir la responsabilidad de la ubicación de estos trabajadores. Así que nosotros también vamos a trabajar en ese sector par que ellos asuman esa responsabilidad. Con relación al artículo 15, deseo señalar que la norma, como está redactada, se refiere específicamente —no excluyentemente— al personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que se desempeña en las comisiones médicas. Esto es porque, sin perjuicio de la protección —que en general van a tener los trabajadores de la Superintendencia, que continuará funcionando—, quisimos preservar en este proyecto que sometemos a consideración la situación muy particular de las comisiones médicas que no pueden detener su funcionamiento y que cubre no solamente el espacio propio del sistema de jubilaciones y pensiones, sino también las previsiones de la ley de riesgos de trabajo, le diría que más de una que de otra. Por lo tanto, en una primera instancia, quisimos asegurar y llevar tranquilidad al funcionamiento de las comisiones médicas. Reitero, no es excluyente de lo que ocurrirá con el resto de los trabajadores. **Sra. Negre de Alonso.** — Me surge nuevamente la duda. Pensé que era un tema de técnica legislativa. Para que quede claro, el segundo párrafo se refiere al personal médico. Entonces, no está especificado en el artículo 14 que se le computará el tiempo anteriormente trabajado para el resto del personal. ¿Solamente se refiere al personal que tiene que ver con las comisiones y no el resto del personal? **Sr. Tomada.** — Así es. Le digo más, el hecho de que no diga eso no quiere decir que no pueda ocurrir en cada una de las transferencias.

Segundo, el haber establecido ya en el texto, en el caso del artículo 14, que para los efectos señalados se le va a asegurar la antigüedad, es un avance; es un progreso porque son trabajadores que vienen del sector privado al sector público. Es diferente a la situación de la gente que viene de la Superintendencia, que es gente que viene del sector público y va al sector público. **Sra. Negre de Alonso.** — El habérselo establecido se refiere a la garantía del Estado que va a propender al empleo. **Sr. Tomada.** — Y la antigüedad. **Sra. Negre de Alonso.** — No, en el artículo 14 no quedó lo referido a la antigüedad. **Sr. Tomada.** — Sí. Dice: “... con reconocimiento de la antigüedad a los efectos del goce de las licencias...” **Sra. Negre de Alonso.** — Disculpe. Tengo otra inquietud —no sé si me la contestará usted o el ministro— respecto del artículo 12 incorporado por la Cámara de Diputados. **Sr. Boudou.** — Deseo aclarar algo más. Cuando se habla de la oportunidad y demás es porque la gente que trabaja en la parte médica de la Superintendencia puede ir a la Superintendencia de la ART, a la ANSeS o a la Superintendencia de Salud. **Sr. Tomada.** — Mañana mismo, cuando se sancione la ley o después cuando se acomoden las funciones. **Sr. Boudou.** — Porque es dentro del Estado. **Sr. Tomada.** — Sí. Versión Taquigráfica, Plenario de Comisiones, 10/11/2008

Disposiciones Varias

Artículo 126.- Dispóngase la revisión, actualización y aprobación, por períodos de cada cinco (5) años, de los correspondientes cálculos actuariales en referencia a los derechos establecidos en la presente ley.

Artículo 127.- Deróganse las Leyes Nros. 24.241 de [Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones](#), 24.463 de Solidaridad Previsional, 26.417 de Prestaciones Previsionales y 26.124 de Modificación de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y elimínase la mención de la Ley N° 23.548 en el artículo 2° de la 24.130 (devolución 15% coparticipación a las provincias).

Artículo 128.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Ernesto R. Sanz.- Gerardo R. Morales.- Roy A. Nikisch.-

APÉNDICE al Anexo I

RELACION DE PROPUESTAS INCLUIDAS EN EL ANEXO I Y SU CORRELATO CON LEY 24.241 Y LEGISLACIÓN CONEXA

| Nº de artículo en Ley 24.241 | FUENTE: | Número de artículo en documento en ANEXO I | Observaciones |
|------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 1 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (001) | 1 | |
| 2 | TEXTO VIGENTE | 2 | |
| 3 | TEXTO VIGENTE | 3 | MODIFICADO POR LEY Nº 24.347 / VER TAMBIEN DECRETO Nº 493/00 |
| 4 | TEXTO VIGENTE | 4 | |
| 5 | TEXTO VIGENTE | 5 | |
| 6 | TEXTO VIGENTE | 6 | |
| 7 | TEXTO VIGENTE | 7 | |
| 8 | TEXTO VIGENTE | 8 | |
| 9 | TEXTO VIGENTE CON MODIFICACIONES | 9 | MODIFICADO POR LEY Nº 26.222, POR DECRETO Nº 491/04 Y POR DECRETO Nº 1346/07 / REGLAM. POR DECRETOS Nº 290/00, 279/08 Y 1448/08 |
| 10 | TEXTO VIGENTE | 10 | |
| 11 | TEXTO VIGENTE | 11 | |
| 12 | TEXTO VIGENTE | 12 | |
| 13 | TEXTO VIGENTE | 13 | |
| 14 | TEXTO VIGENTE | 14 | MODIFICADO POR DECRETO Nº 1099/00 |
| 15 | TEXTO VIGENTE | 15 | |
| 16 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (002) | 16 | |
| 17 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (003) | 17 | |
| 18 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (004) | 18 | |
| 19 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (005) | 19 | |
| 20 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (006) | 20 | |
| 21 | TEXTO NO VIGENTE | --- | DEROGADO POR LEY Nº 26.417 |
| 22 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (007) | 21 | |
| 23 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (008) | 22 | |
| 24 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (009) | 23 | |
| 25 | TEXTO VIGENTE | 24 | |
| | NUEVO TEXTO PROPUESTO (054) | 25 | |
| 26 | PROPUESTA DE DEROGACION (010) | --- | |
| 27 | PROPUESTA DE DEROGACION (010) | --- | |
| 28 | PROPUESTA DE DEROGACION (010) | --- | |
| 29 | PROPUESTA DE DEROGACION (010) | --- | |
| 30 | PROPUESTA DE DEROGACION (010) | --- | |
| 30 BIS | PROPUESTA DE DEROGACION (010) | --- | |
| 31 | TEXTO VIGENTE | 26 | |
| 32 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (011) | 27 | |
| 33 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (012) | 28 | |
| 34 | TEXTO VIGENTE | 29 | MODIFICADO POR LEY Nº 24.463 / VER TAMBIEN DECRETO Nº 1306/00 |

| N° de artículo en Ley 24.241 | FUENTE: | Número de artículo en documento en ANEXO I | Observaciones |
|------------------------------|-------------------------------|--|---|
| 34 BIS | PROPUESTA DE DEROGACION (013) | --- | |
| 35 | PROPUESTA DE DEROGACION (013) | --- | |
| 36 | TEXTO VIGENTE | 30 | REGLAMENTADO POR DECRETO N° 2091/93 |
| 37 | PROPUESTA DE DEROGACION (013) | --- | |
| 38 | TEXTO VIGENTE | 31 | REGLAMENTADO POR DECRETO N° 1306/00 |
| 39 | PROPUESTA DE DEROGACION (013) | --- | |
| 40 | PROPUESTA DE DEROGACION (013) | --- | |
| 41 | PROPUESTA DE DEROGACION (013) | --- | |
| 42 | PROPUESTA DE DEROGACION (013) | --- | |
| 43 | PROPUESTA DE DEROGACION (013) | --- | |
| 44 | PROPUESTA DE DEROGACION (013) | --- | |
| 45 | PROPUESTA DE DEROGACION (013) | --- | |
| 46 | PROPUESTA DE DEROGACION (013) | --- | |
| 47 | PROPUESTA DE DEROGACION (013) | --- | |
| 48 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (014) | 32 | |
| 49 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (015) | 33 | |
| 50 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (016) | 34 | |
| 51 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (017) | 35 | |
| 52 | TEXTO VIGENTE | 36 | |
| 53 | TEXTO VIGENTE | 37 | VER DECRETO N° 1306/00 Y RESOLUCIÓN ANSES N° 671/08 |
| 54 | TEXTO VIGENTE | 38 | |
| 55 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 56 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 57 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 58 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 59 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 60 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 61 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 62 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 63 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 64 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 65 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 66 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 67 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 68 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 69 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 70 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 71 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 72 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 73 | PROPUESTA DE DEROGACION (019) | --- | |
| 74 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (028) | 39 | |
| 75 | PROPUESTA DE DEROGACIÓN (019) | | |
| 76 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (030) | 40 | |
| 77 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (031) | 41 | |
| 78 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (032) | 42 | |
| 79 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (033) | 43 | |
| 80 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (034) | 44 | |
| 81 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (035) | 45 | |
| 82 | PROPUESTA DE DEROGACION (036) | --- | |
| 83 | PROPUESTA DE DEROGACION (036) | --- | |
| 84 | PROPUESTA DE DEROGACION (036) | --- | |
| 85 | PROPUESTA DE DEROGACION (036) | --- | |
| 86 | PROPUESTA DE DEROGACION (036) | --- | |
| 87 | TEXTO NO VIGENTE | --- | DEROGADO POR DECRETO 1495/01 |
| 88 | TEXTO NO VIGENTE | --- | DEROGADO POR DECTO. 1495/01 |

| N° de artículo en Ley 24.241 | FUENTE: | Número de artículo en documento en ANEXO I | Observaciones |
|------------------------------|----------------------------------|--|---------------|
| 89 | PROPUESTA DE DEROGACION (036) | --- | |
| 90 | PROPUESTA DE DEROGACION (036) | --- | |
| 91 | PROPUESTA DE DEROGACION (036) | --- | |
| 92 | PROPUESTA DE DEROGACION (036) | --- | |
| 93 | PROPUESTA DE DEROGACION (036) | --- | |
| 94 | PROPUESTA DE DEROGACION (036) | --- | |
| 95 | PROPUESTA DE DEROGACION (036) | --- | |
| 96 | PROPUESTA DE DEROGACION (036) | --- | |
| 97 | PROPUESTA DE DEROGACION (036) | --- | |
| 98 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (037) | 46 | |
| 99 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 100 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 101 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 102 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 103 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 104 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 105 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 106 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 107 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 108 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 109 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 110 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 111 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 112 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 113 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 114 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 115 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 116 | PROPUESTA DE DEROGACION (038) | --- | |
| 117 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (039) | 47 | |
| 118 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (040) | 48 | |
| 119 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (041) | 49 | |
| 120 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (042) | 50 | |
| 121 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (043) | 51 | |
| 122 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (044) | 52 | |
| 123 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (045) | 53 | |
| 124 | PROPUESTA DE DEROGACION (046) | --- | |
| 125 | PROPUESTA DE DEROGACION (046) | --- | |
| 126 | PROPUESTA DE DEROGACION (046) | --- | |
| 127 | PROPUESTA DE DEROGACION (046) | --- | |
| 128 | PROPUESTA DE DEROGACION (046) | --- | |
| 129 | TEXTO VIGENTE | 54 | |
| 130 | TEXTO VIGENTE | 55 | |
| 131 | TEXTO VIGENTE CON MODIFICACIONES | 56 | |
| 132 | TEXTO VIGENTE | 57 | |
| 133 | TEXTO VIGENTE | 58 | |
| 134 | TEXTO VIGENTE | 59 | |
| 135 | PROPUESTA DE DEROGACION (046) | --- | |
| 136 | PROPUESTA DE DEROGACION (046) | --- | |
| 137 | PROPUESTA DE DEROGACION (046) | --- | |
| 138 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (047) | 60 | |
| 139 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (048) | 61 | |
| 140 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (049) | 62 | |
| 141 | NUEVO TEXTO PROPUESTO (050) | 63 | |
| 142 | PROPUESTA DE DEROGACION (051) | --- | |
| 143 | TEXTO VIGENTE | 64 | |
| 144 | TEXTO VIGENTE | 65 | |
| 145 | TEXTO VIGENTE | 66 | |
| 146 | TEXTO VIGENTE | 67 | |
| 147 | TEXTO VIGENTE | 68 | |

| N° de artículo en Ley 24.241 | FUENTE: | Número de artículo en documento en ANEXO I | Observaciones |
|------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 148 | TEXTO VIGENTE | 69 | |
| 149 | TEXTO VIGENTE | 70 | |
| 150 | TEXTO VIGENTE | 71 | |
| 151 | TEXTO VIGENTE | 72 | |
| 152 | PROPUESTA DE DEROGACION (051) | --- | |
| 153 | TEXTO VIGENTE | 73 | |
| 154 | TEXTO VIGENTE | 74 | |
| 155 | TEXTO VIGENTE | 75 | |
| 156 | TEXTO VIGENTE | 76 | |
| 157 | TEXTO VIGENTE | 77 | |
| 158 | TEXTO VIGENTE CON MODIFICACIONES | 78 | |
| 159 | TEXTO VIGENTE | 79 | |
| 160 | TEXTO NO VIGENTE | --- | DEROGADO POR LEY N° 24.463 |
| 161 | TEXTO VIGENTE | 80 | |
| 162 | TEXTO VIGENTE | 81 | |
| 163 | TEXTO NO VIGENTE | --- | VETADO POR DECRETO N° 2091/93 |
| 164 | TEXTO NO VIGENTE | --- | DEROGADO DECRETO N° 2091/93 |
| 165 | TEXTO VIGENTE | 82 | |
| 166 | TEXTO VIGENTE | 83 | |
| 167 | TEXTO VIGENTE | 84 | |
| 168 | TEXTO VIGENTE | 85 | |
| 169 | TEXTO VIGENTE | 86 | |
| 170 | TEXTO VIGENTE | 87 | |
| 171 | TEXTO VIGENTE | 88 | |
| 172 | TEXTO VIGENTE | 89 | |
| 173 | TEXTO VIGENTE | 90 | |
| 174 | TEXTO NO VIGENTE | --- | DEROGADO POR LEY N° 26.222 |
| 175 | TEXTO NO VIGENTE | --- | DEROGADO POR LEY N° 26.222 |
| 176 | TEXTO VIGENTE CON MODIFICACIONES | 91 | |
| 177 | TEXTO VIGENTE | 92 | |
| 178 | TEXTO VIGENTE | 93 | |
| 179 | TEXTO VIGENTE | 94 | |
| 180 | TEXTO VIGENTE | 95 | |
| 181 | TEXTO VIGENTE CON MODIFICACIONES | 96 | |
| 182 | TEXTO VIGENTE | 97 | |
| 183 | TEXTO VIGENTE | 98 | |
| 184 | TEXTO VIGENTE | 99 | |
| 185 | TEXTO VIGENTE | 100 | |
| 186 | TEXTO VIGENTE | 101 | |
| 187 | TEXTO VIGENTE | 102 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (052) | 103 | |
| 188 | TEXTO VIGENTE | 104 | |
| 189 | TEXTO NO VIGENTE | --- | VETADO POR DECRETO 2091/93 |
| 190 | TEXTO VIGENTE | 105 | |
| 191 | TEXTO VIGENTE | 106 | |
| 192 | TEXTO VIGENTE | 107 | |
| 193 | TEXTO VIGENTE | 108 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (025) | 109 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (026) | 110 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (027) | 111 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (029) | 112 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (018) | 113 | |

| N° de artículo en Ley 24.241 | FUENTE: | Número de artículo en documento en ANEXO I | Observaciones |
|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (020) | 114 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (021) | 115 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (022) | 116 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (023) | 117 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (024) | 118 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (053) | 119 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (055) | 120 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (AD) | 121 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (056) | 122 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (057) | 123 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (AD) | 124 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (AD) | 125 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (058) | 126 | |
| --- | NUEVO TEXTO PROPUESTO (059) | 127 | |
| 194 | | 128 | ARTÍCULO DE FORMA |

Ernesto R. Sanz.- Gerardo R. Morales.- Roy A. Nikisch.-

ANEXO II

MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.156 EN LO QUE RESPECTA A LA INTEGRACIÓN DE LA COMISION MIXTA REVISORA DE CUENTAS

Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 128 de la Ley Nº 24.156, el que quedará redactado de la siguiente forma:

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas estará formada por seis (6) senadores y seis (6) diputados cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan.

En cada Cámara serán designados dos (2) miembros a propuesta del partido político de gobierno y cuatro (4) a propuesta de los partidos de oposición de la primera y segunda minoría.

Las propuestas deberán tener en cuenta el equilibrio de genero.

Anualmente la Comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario que pueden ser reelectos.

La Comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto general y estará investida con las facultades que ambas Cámaras delegan en sus comisiones permanentes y especiales.

Ernesto R. Sanz.- Gerardo R. Morales.- Roy A. Nikisch.-